



DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

I LEGISLATURA

Año: 1985

Nº 48

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON PEDRO GUERRA CABRERA

SESIÓN PLENARIA Nº 38

Jueves, 26 de diciembre de 1985

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO:

AUDIENCIA DEL PARLAMENTO

Proyecto de Real Decreto-Ley sobre adaptación de la
imposición indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla.

SUMARIO

Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuarenta minutos.

Antes de pasar a debatir el punto único del orden del día, intervienen para una cuestión de orden los señores Marcos Hernández (G.P. Popular), Olarte Cullen (G.P. Centro Democrático-CDS), Brito González (G.P. Mixto), Angulo González (G.P. Izquierda Canaria) y Brito Soto (G.P. Socialista Canario). La Presidencia se dirige a la Cámara en relación con esta cuestión.

**AUDIENCIA DEL PARLAMENTO.
PROYECTO DE REAL DECRETO-LEY
SOBRE ADAPTACIÓN DE LA IMPOSICIÓN
INDIRECTA EN CANARIAS, CEUTA Y
MELILLA.**

Página 2985

Por orden de presentación corresponde al G.P. Socialista Canario la defensa de la propuesta de informe, que realiza el señor Brito Soto. En contra de esta propuesta toman la palabra los señores Toledo Rodríguez (G.P. Mixto) y Suárez Gil (G.P. Popular). Para contestar los planteamientos precedentes toma la palabra el señor Consejero de Hacienda, Bergasa Perdomo.

Utilizan el turno de réplica los señores Brito Soto (G.P. Socialista Canario), Toledo Rodríguez (G.P. Mixto) y Suárez Gil (G.P. Popular). El señor Consejero de Hacienda vuelve a tomar la palabra para su contestación.

Por parte del G.P. Izquierda Canaria, fija la posición el señor Sanjuán Hernández.

El señor Brito González plantea una cuestión de orden, a la que hace referencia la Presidencia con posterioridad. Continúa en posesión del uso de la palabra para hacer la defensa de la propuesta de informe del G.P. Mixto, que al término de su intervención retira. Los señores Olarte Cullen y Marcos Hernández siguen el mismo procedimiento con las propuestas de informe de los G.P. Centro Democrático-CDS y Popular, respectivamente.

A propósito del contenido de estas intervenciones toma parte en el debate el señor Presidente del Gobierno, Saavedra Acevedo.

Vuelve a intervenir el señor Marcos Hernández en turno de réplica.

Se somete a votación la propuesta de informe del G.P. Socialista Canario, y resulta aprobada, pero sin alcanzar la mayoría requerida por el artículo 45.3.

Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos.

(Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuarenta minutos.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Señor Presidente, para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Dígame.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Han llegado a manos de mi grupo las disposiciones generales publicadas en el *Boletín Oficial del Estado*, número 40.301, del lunes 23 de diciembre, el real decreto-ley que en el día de hoy vamos a tratar en este Parlamento.

Nos parece a nosotros verdaderamente sorpresivo y fuera de toda lógica que, habiendo planteado y habiendo discutido ampliamente el procedimiento a seguir en la tarde de hoy por el artículo 45.3, que es precisamente el que exige informe previo, previo informe del Parlamento de Canarias, que evidentemente aparezca ya publicado el texto que vamos a redactar y cuyo informe vamos a criticar o vamos a aprobar, que aparezca ya publicado en el *Boletín Oficial del Estado*. Eso es una falta de consideración a este Parlamento, a esta comunidad, que la considero de la máxima gravedad. Debe de quedar constancia de mi exposición e, incluso, creo que la misma merece hasta la propia suspensión del Pleno.

El señor OLARTE CULLEN (Desde su escaño): Señor Presidente, para una cuestión de orden también.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, don Lorenzo.

El señor OLARTE CULLEN (Desde su escaño): Mi grupo parlamentario considera que en este momento hemos sido convocados y hemos venido de distintos puntos, y algunos lejanos, de otras islas, para debatir el informe sobre el proyecto del real decreto, cuyo proyecto ha pasado ya a ser real decreto-ley, según se ha publicado en el *Boletín Oficial del Estado* del día 23 y se ha aclarado en el del día 24, el último de los cuales todavía no ha llegado, por cierto, a estas islas.

Consecuentemente con ello, mi grupo solicita la suspensión de este Pleno, puesto que ya no tiene razón de ser un debate para emitir un informe con carácter previo a un proyecto de ley, sobre lo cual ya no podemos pronunciar parecer de ningún tipo.

Consecuentemente con ello, nosotros solicitamos que se suspenda este Pleno y se convoque otro en el cual analicemos, no el proyecto, sino el real decreto-ley y en cualquier caso el acuerdo, que mi grupo

formalmente propondrá a la Cámara, de interponer el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional por haberse incumplido el trámite previo consagrado en la Constitución y Estatuto de Autonomía.

Nada más, señor Presidente.

(El señor Brito González solicita hacer uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE: Don Oswaldo Brito.

El señor BRITO GONZÁLEZ (Desde su escaño): Igualmente, señor Presidente, para una cuestión de orden.

Yo pienso que en este caso, y para no reiterar cuestiones que se han dicho, hay que señalar que ya de por sí el trato que se está recibiendo por parte del Gobierno central —del Gobierno del Estado— respecto a Canarias, no solamente se explicita en una marginación sistemática y permanente, como ya ocurriera en el tema del Real Decreto-Ley de exacción de las gasolinas, sino que además, y dada esa ubicuidad en la cual se está situando a Canarias junto con Ceuta y Melilla, hay que hablar de que el tratamiento que se le está dando a Canarias es propio del que se daba a los restos del imperio, y en este sentido es muy propio que lógicamente se ubique a Canarias junto con Ceuta y Melilla.

En segundo lugar, hay que decir que hay una indudable actuación de burla, de burla total y absoluta, al Parlamento de Canarias, a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía. Ésta es la expresión más clara, señor Presidente, señores diputados, de lo que significa el respeto del poder central, el respeto del Gobierno central, a lo que se ha dictado en el propio Estatuto de Autonomía y en la Constitución. Ésta es la experiencia más vergonzosa que yo como canario pueda experimentar en todo el tiempo que llevo en esta Cámara, y conste que han existido ya ocasiones diversas en que los derechos de los canarios y los derechos de Canarias han sido humillados, y profundamente, por el poder central. Ésta es, sin duda, una auténtica *tomadura de pelo*...

El señor PRESIDENTE: Señor Brito, por favor, yo le ruego que no afecte a la cortesía parlamentaria con expresiones como "vergonzosas" o "*tomaduras de pelo*", que, en todo caso, no son propias de una cuestión de orden. Diga su Señoría qué es lo que pretende con la cuestión de orden.

El señor BRITO GONZÁLEZ (Desde su escaño): Muchas gracias, señor Presidente, en su reiterado cariño para evitar mis expresiones. Yo pensaba que estábamos también en un régimen de libertad parlamentaria. Yo no estoy aquí afectando a la cortesía de nadie: otros diputados se han expresado con libertad y sin afectar a ninguna cortesía. Pero evidentemente —para terminar, señor Presidente—

indicar que, efectivamente, estamos de más hoy aquí en esta Cámara, sobra este Pleno y esto es una *toma-dura de pelo*, lo recalco, señor Presidente, y no es una falta de cortesía a nadie. Y si es descortesía es al Gobierno central, que no ha tenido la mínima cortesía de respetar a este Parlamento y al Gobierno de Canarias, que debería de tener conocimiento de este decreto y no provocar el gasto que está realizándose al Parlamento y a la comunidad de Canarias reuniendo hoy aquí a todos los diputados para hacer un auténtico paripé vergonzoso y lamentable.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

(*El señor Angulo González solicita intervenir.*)

El señor PRESIDENTE: ¿Don Gonzalo Angulo?

El señor ANGULO GONZÁLEZ (*Desde su escaño*): Dentro del tema que se ha planteado reiteradamente en esta cuestión de orden, manifestar también el malestar del Grupo Parlamentario Izquierda Canaria con el procedimiento que se ha seguido por el Gobierno central.

Ello, no obstante, es obvio que este procedimiento está avalado, al menos, por una conocida sentencia del Tribunal Constitucional, que permite que el informe a emitir por este Parlamento lo sea, en el caso concreto de un real decreto-ley, con antelación al trámite de convalidación.

Por lo tanto, el informe que hoy hay que emitir es posible según la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, aunque yo tengo que decir que personalmente, con todos los respetos que me merece el Tribunal Constitucional, no la comparto. Pero es cierto que está con ese precedente y con esa doctrina. Cuestión distinta es que este tema de orden, en el que insisto que nuestro grupo expresa su malestar por el procedimiento seguido, pueda oscurecer la importancia, la urgencia y también las notorias presiones que desde distintos círculos económicos, perfectamente identificables, intentan obstruir hoy la posibilidad de un REF más progresivo y, por otra parte, la posibilidad de un régimen transitorio previo a este REF. Nosotros entendemos que en la tarde de hoy no se puede hacer bascular el tema exclusivamente hacia un tema de procedimiento, que insisto que lamentamos, y desconocer la urgencia, la necesidad de contar con este régimen transitorio, y por otra parte los intereses que en estos momentos están batallando, en algunos casos, bastante unitaria, en un sentido contrario a cualquier reforma progresista del REF.

Por lo tanto, entendemos que procede sin mayores dramatismos la continuidad de este Pleno. Otra cosa distinta, de *lege ferenda*, es que el Parlamento y algunos grupos de los que han hablado estén, efectivamente, interesados en producir una reforma estatutaria constitucional que dote a la Comunidad Autónoma Canaria de mayores instrumentos de defensa de sus intereses, en vez de los alicortos que consagra

el artículo 45 del Estatuto y la disposición adicional tercera de la Constitución española. En ese caso, nuestro grupo ha manifestado reiteradamente su voluntad de proceder en este sentido en el que curiosamente y en momentos cruciales no hemos obtenido el concurso de algunos portavoces que hasta ahora han intervenido.

(*El señor Brito Soto solicita intervenir en el debate.*)

El señor PRESIDENTE: El señor Brito.

El señor BRITO SOTO (*Desde su escaño*): Bien. Señalar que si bien desde el punto de vista político posiblemente resulte deseable en el caso de los reales decretos-ley el que el trámite de informe por parte del Parlamento de Canarias se emita con carácter previo a la aprobación del mismo por el Consejo de Ministros, y es el criterio de nuestro grupo que ése es el momento deseable, desde el punto de vista jurídico, que es el punto de vista que en principio puede motivar un condicionamiento respecto de la celebración o de la validez del acto parlamentario que vamos a celebrar, la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia quedó claramente establecida en relación con el Recurso de Inconstitucionalidad número 310/83, interpuesto por el Parlamento de Canarias, contra el *Real Decreto-Ley 1/1983, de 9 de febrero, por el que se deroga la exacción sobre el precio de las gasolineras de automoción en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla*.

En tal sentido, en su fundamento jurídico número cuarto, apartado segundo o párrafo segundo, dice tal sentencia: "Si ello es así, emerge con claridad lo inexcusable del informe o audiencia del Parlamento canario requerido por esos mismos textos, que en supuestos como el presente —se trataba también de un real decreto-ley— podrán obtenerse antes de la convalidación del real decreto-ley de que se trata. Conclusión que se ve fortalecida al observar de un lado", etcétera, etcétera, etcétera...

Por consiguiente, desde nuestro punto de vista, tiene amparo en una sentencia anterior del Tribunal Constitucional, que es este un momento procedimental oportuno para la emisión de tal informe, y nuestro grupo parlamentario no ve por ello ningún obstáculo para que prosiga el Pleno y emita efectivamente tal informe.

El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa de la Cámara, en cuya representación hablo, manifiesta, en primer lugar, su extrañeza, al menos su extrañeza, por cuanto en una reunión de la Junta de Portavoces que acaba de celebrarse, en la que la Presidencia expuso a los portavoces los tiempos del procedimiento y el tipo de procedimiento que se iba a establecer por encontrarse tres propuestas de informe con homogeneidad de fines y de contenido, y, sin embargo, manifiesta su extrañeza ante el hecho de que no

se formularan estas cuestiones de orden en la Junta de Portavoces previa a este Pleno.

En segundo lugar, efectivamente el Presidente ha informado a la Mesa de la publicación del real decreto-ley al que sus Señorías han hecho referencia, la Mesa no ha entrado ni entra en cuestiones o valoraciones de carácter político; la Mesa, aplicando el artículo 28 del Reglamento, tiene solamente una función de carácter jurídico, que es la de calificar los documentos, admitirlos o no admitirlos, y en definitiva la Mesa no encuentra argumentos jurídicos en la disposición adicional tercera, en el artículo 86 de la Constitución, en el artículo 45.3 del Estatuto, y en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional referente al recurso que presentó la propia Cámara contra el real decreto de las gasolinas, en la que se especifica que en el tema de los reales decretos una cosa es la publicación y otra cosa es la convalidación. Los reales decretos han de ser convalidados por el Congreso, o derogados por el Congreso, como establece el artículo 86 de la Constitución. Y en definitiva, en ese trámite se puede perfectamente presentar el informe a que hace alusión el artículo 45.3.

En definitiva, la Mesa considera que no se desvirtúa, que no se desnaturaliza el espíritu ni el contenido literal del artículo 45.3, por el hecho de que se haya publicado el real decreto en cuestión y, en consecuencia, considera que no ha lugar a la suspensión del Pleno, sino que continúe con carácter inmediato.

El otro tema planteado por don Lorenzo Olarte, del recurso de inconstitucionalidad, efectivamente la Cámara puede presentar, como sus Señorías saben, cualquier recurso de inconstitucionalidad, y para eso si se presentan las solicitudes oportunas, las iniciativas oportunas al respecto, la Cámara se convocará y en función de que se obtenga o no la mayoría absoluta correspondiente se presentará o no el recurso de inconstitucionalidad, si don Lorenzo Olarte presenta la iniciativa correspondiente.

El señor OLARTE CULLEN (*Desde su escaño*): Será presentada, señor Presidente.

AUDIENCIA DEL PARLAMENTO. PROYECTO DE REAL DECRETO-LEY SOBRE ADAPTACIÓN DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA EN CANARIAS, CEUTA Y MELILLA.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a continuar, Señorías, o vamos a empezar la sesión que tiene como punto único del orden del día el informe previo y preceptivo del Parlamento respecto del Proyecto de Real Decreto-Ley sobre adaptación de la Imposición Indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla.

Tal como se acordó por la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, se han presentado cuatro

propuestas de informe y corresponde la presentación y defensa de su propuesta al Grupo Socialista en primer lugar. Tiene la palabra don Augusto Brito.

La propuesta de informe del Grupo Socialista entró en el Registro con el número 1.407, el día 24 de diciembre, a las ocho horas y cincuenta y cinco.

El señor BRITO SOTO: Señor Presidente. Señorías.

Una vez planteado el primer problema de los que yo pensaba abordar en mi inicial comparecencia ante ustedes, relativo a cuál era el momento procedimentalmente oportuno para la emisión del informe previsto en el 45.3 del Estatuto de Autonomía y disposición adicional tercera de la Constitución española, porque, efectivamente, se plantea un problema respecto de cuál ha de ser ese momento procedimental oportuno para la emisión del informe.

No cabe duda de que la garantía institucional de la Comunidad Autónoma Canaria queda mejor establecida si el informe se emitiera en el momento anterior o previo a la elaboración o a la aprobación por parte del Gobierno de tal decreto-ley. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional, sentada como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad, planteado precisamente por esta Cámara en relación con el anterior real decreto-ley que afectó al Régimen Económico y Fiscal, sienta esta posibilidad —a que anteriormente me he referido— y estamos, por consiguiente, legalmente habilitados para emitir el informe en este momento previo a la convalidación por parte de las Cortes Generales de tal real decreto-ley.

Por consiguiente, consideramos despejado desde el punto de vista jurídico el primer problema a plantear, y es el del momento de la emisión del informe, si bien los socialistas estimamos adecuado igualmente, o estimaríamos adecuado igualmente, el que se estableciera con mayor precisión el hecho de que el informe deba ser emitido en el caso de real decreto-ley con anterioridad a la aprobación por Consejo de Ministros.

El segundo problema que desde nuestro punto de vista se plantea —y tiempo habrá esta tarde en el turno en contra que deberé hacer a las propuestas de otros grupos, creo que me extenderé en mayor medida en esta materia—, el segundo problema que se plantea es el problema de si la norma por la cual se produce lo que en definitiva no es más que una adecuación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias al nuevo marco de la imposición indirecta estatal, si esa norma, concretamente el rango de real decreto-ley de la misma, es norma jurídica adecuada para producir los efectos que efectivamente produce o si la reserva de ley establecida en la Constitución española obligaría a que sólo por un proyecto de ley, tramitado por el Gobierno, o por una proposición de ley, en definitiva sólo a través del trámite de ley, pudiera operarse en tal materia.

Indicar en tal sentido, brevemente, algunas cuestiones al respecto.

En primer lugar, situar algunas reflexiones, dado que el problema ya viene planteado en los escritos de informe alternativo que presentan los otros grupos. El Tribunal Constitucional, en sentencia 6 de 1983, de 4 de febrero, indica al respecto lo siguiente —bueno, empieza hablando, nos interesa referirnos solamente al problema específico de la capacidad del decreto-ley para introducir modificaciones en la regulación de los tributos—: "El Tribunal Constitucional, siguiendo el planteamiento de los propios autos del Tribunal que elevaba la cuestión, el cual aducía la posible ilegitimidad del decreto-ley para regular una materia amparada por la reserva del artículo 31.3 de la Constitución española —artículo que por cierto cita algún grupo parlamentario en su argumentación—, conecta de manera inmediata la solución de este problema con la caracterización del instituto de la reserva de la Ley Tributaria y con la delimitación de su alcance material". La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional es la siguiente: "Debemos señalar que no se violaron con la utilización del reseñado real decreto-ley los estrictos límites genéricos que el artículo 86 —artículo regulador en la Constitución de la figura del decreto-ley— contempla textualmente. Aunque el argumento ha sido esgrimido en el proceso de que esta cuestión de constitucionalidad dimana no se puede decir que el decreto-ley cuestionado afecte a lo que el artículo 86 de la Constitución llama los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, por el hecho de que en el referido título I se encuentra el artículo 31 —quiere decir 31.3—, según el cual, como más arriba hemos visto, sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, pues ya hemos dicho que en el sistema constitucional español no rige de manera absoluta el principio de legalidad para todo lo atinente a la materia tributaria y que la reserva de ley se limita a la creación de los tributos y a su esencial configuración dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de exenciones o bonificaciones, pero no cualquier otra regulación de ellas", etcétera, etcétera.

Cuestión que resulta refrendada por la doctrina tributarista, la doctrina del Derecho Financiero español, que dice, en la *Revista española de Derecho Tributario*, concretamente, creo recordar que en una conclusión a la que llega Martín Queralt, dice: "En una línea que se halla próxima a la conclusión de Martín Queralt se sitúan Sáinz de Bujanda, Antón Pérez, N. Amorós Rica, Ferreiro Lapatza, etcétera, etcétera, todos los cuales se pronuncian por limitar la prohibición del decreto-ley a la creación de tributos, pero no a la modificación de los existentes".

Así pues, es el decreto-ley norma factible, norma habilitante para producir lo que, en definitiva, no es

más que la adecuación de la Ley del REF al nuevo marco de imposición indirecta estatal, donde en definitiva no se crea ningún tributo. Todos los tributos a que hace referencia el real decreto-ley son tributos creados por leyes anteriores, y hoy vigentes. Concretamente, concretamente los dos arbitrios a partir de la Ley del REF, a partir de la Ley 30/72, concretamente el ITE creado a partir del texto refundido del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas, etcétera, etcétera. Estamos, pues, ante normas legales preexistentes que crean los tributos, cuestión a la que se refiere la doctrina del Tribunal Constitucional, y estamos ante una norma que produce una adaptación, siquiera una modificación, una mera adaptación, adaptación que, como acabamos de comprobar, tanto en virtud de lo planteado por la doctrina del Tribunal Constitucional como en virtud de lo planteado por la propia doctrina tributarista española, es perfectamente factible. Por consiguiente, estimamos adecuado el carácter, el rango de real decreto-ley para la producción de la adaptación a que hacemos referencia y tendremos oportunidad incluso de profundizar en esta materia.

La tercera cuestión vendría planteada por el contenido de la propuesta de informe que efectúa el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista efectúa una propuesta de informe que tiene tres partes que vamos a comentar brevemente.

En la primera se señala que pretendemos se informe favorablemente por este Parlamento el real decreto-ley del Gobierno de la nación de adaptación de la imposición indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla, norma que posibilita con carácter transitorio y hasta la reforma general del REF una adecuada adaptación de nuestro Régimen Económico y Fiscal al nuevo marco de la imposición indirecta estatal. En definitiva, dos notas fundamentales configuran lo que es el núcleo de la cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Socialista:

La primera, que estamos ante un real decreto-ley, norma hábil para producir tal adaptación, que meramente pretende producir una adaptación transitoria del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, actualmente vigente, al nuevo marco de la imposición indirecta estatal. Cuestión que es ineludible por cuanto era imprescindible, en definitiva, adecuar los sistemas fiscales vigentes en Península y Canarias a partir de la entrada en vigor del REF y regular el propio marco de relaciones comerciales estableciendo los ajustes fiscales en fronteras y estableciendo un marco homogéneo que permitiese el comercio adecuado entre Canarias y Península.

Por tanto, estamos, en primer lugar, decimos, ante una norma de carácter transitorio que pretende adecuar, no estamos ante la norma definitiva que deba reformar con carácter general el REF en Canarias. ¿Y qué se ha pretendido hacer en relación con este período transitorio que vamos a procurar no dure más allá de seis meses?, ¿qué se ha pretendido hacer

en contacto con las organizaciones económicas de Canarias, principales afectadas en esta cuestión? Pues se ha pretendido fundamentalmente dejar el Régimen Económico y Fiscal inalterado, alterarlo exclusivamente en aquellos aspectos donde era imprescindible la adaptación; alterarlo exclusivamente en aquellos aspectos en que, de no haberse producido la adaptación, se hubiera producido una inadecuación de las relaciones comerciales entre Canarias y Península, en perjuicio posiblemente de la propia economía de Canarias.

Éste es el objetivo, no hay más objetivo que establecer ese marco transitorio hasta la reforma definitiva, donde se produzca esa adaptación que, dejando inalterado el Régimen Económico y Fiscal, produciendo las mínimas alteraciones imprescindibles, consecuencia de la reforma general de la imposición indirecta producida en el resto del Estado español, se pueda posibilitar esa pervivencia del REF canario, se pueda posibilitar, y se pueda al mismo tiempo seguir planteando un régimen de comercio similar al que venía existiendo.

El segundo apartado de nuestra resolución pretende señalar, pretende indicar al legislador estatal, y en definitiva al Gobierno de la nación, que es imprescindible complementar tal real decreto-ley con una norma de carácter reglamentario que permita la plena aplicación en Canarias de lo dispuesto en los artículos 16 y 26 (*Abandona su lugar en la Mesa el señor Presidente y ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente primero, Navarro Valdivielso.*) de la Ley 30/72, de 22 de julio, de Régimen Económico y Fiscal, en cuanto al régimen aplicable a la desgravación fiscal a las exportaciones canarias. Evidentemente, frente a la opinión de algunas de las propuestas de informe que he visto, que indican que el artículo 16—dirían también evidentemente que el 26— de la Ley del Régimen Económico y Fiscal ha desaparecido con el real decreto-ley, hay que decir que ello no es cierto. El artículo 16 de la Ley del REF no ha sido derogado y el artículo 26 de la Ley del REF tampoco ha sido derogado. Esos textos permanecen ahí.

¿Qué es lo que ha desaparecido en nuestro país? Ni el artículo 16 ni el 26 de la Ley del REF. Lo que ha desaparecido es el Decreto 1.255/1970, que regulaba el sistema de aplicación de la desgravación fiscal a la exportación en España, por cuanto se ha pasado, por adecuación a la norma comunitaria, al Tratado de Roma, por adecuación al 95 y siguientes del Tratado de Roma, ha desaparecido en España todo el sistema de desgravación fiscal a la exportación y ha sido sustituido por el sistema de ajuste fiscal en frontera o por el sistema de devolución del IVA.

Bien, pues lo que hace falta concretamente, y no con rango de decreto-ley, sino con puro rango de decreto, y tal cuestión estará ya en las normas de desarrollo de este real decreto-ley, y está ya negociándose con el Estado por parte del Gobierno de

Canarias, como quiera que lo que ha desaparecido es ese Decreto 1.255/1970, y consecuente con él la Orden ministerial de 12 de julio del 74, que trataba precisamente de regular para Canarias, en el ámbito de Canarias, el sistema de desgravación fiscal a la exportación, es imprescindible, por tanto, que aparezca una norma reglamentaria, una norma con rango de decreto, que precisamente lo que haga sea situar un nuevo sistema de aplicación, a través de decreto como decimos, un nuevo sistema de aplicación a lo que viene previsto por la Ley del REF en su artículo 16 y en su artículo 26. Por tanto, y como decimos tal cuestión está ya negociándose con el Estado y estará en las normas reglamentarias de desarrollo de este real decreto-ley, lo que hace falta es que surja un decreto que posibilite la aplicación del 16 y del 26 que permanecen vigentes en el marco de la Ley del Régimen Económico y Fiscal.

Y ésa es la segunda pretensión que planteamos, segunda pretensión que, como decimos, ya está hoy en negociación y segunda pretensión que indicamos debe extenderse esa desgravación fiscal a la exportación en Canarias, de una parte a los arbitrios insulares, de otra parte al impuesto especial.

Respecto del impuesto especial ningún problema, porque ya el artículo 7 de la nueva Ley de Impuestos Especiales establece el sistema de devolución a los exportadores del impuesto. Por consiguiente, ahí no haría falta ni propiamente decreto. Y por lo que respecta al impuesto especial, al ITE, habría que establecer efectivamente un decreto que garantizara que los ITEs que se incorporan en el proceso, no concretamente al ITE aplicado a ejecución de obra-mueble, por cuanto la ejecución de obra-mueble ha sido suprimida como hecho imponible en Canarias, cuestión que, por cierto, va a ahorrar un importante volumen de recursos a los industriales canarios, a los productores canarios, sino referido específicamente a los ITEs de transporte o a los ITEs de flete que se incorporan al producto, establecer un sistema que, adecuado al Tratado de Roma, porque no lo podríamos hacer de otra cosa, ajustado al artículo 95 y siguientes del Tratado de Roma, posibilite, efectivamente, la devolución de los ITEs incorporables al proceso productivo. De ello es, en definitiva, de lo que se trata en relación con este apartado segundo de nuestro informe y en esa materia se está ya trabajando.

Y en el apartado tercero se establece que el Parlamento de Canarias manifiesta su voluntad de que la reforma y adaptación general de la imposición indirecta en Canarias, que deberá unificar la totalidad de la imposición indirecta aplicable en el territorio de la comunidad autónoma, sea desarrollada con urgencia a lo largo del 86. En definitiva, se expresa una manifestación de voluntad del Estado en el sentido de que el REF definitivo se produzca en 1986 y establezca un nuevo sistema, nuevo sistema que desde nuestro punto de vista no sólo debe reordenar

la imposición indirecta en Canarias, sino que debe también colocarse en relación con lo que sea el nuevo sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Navarro Valdivielso): Muchas gracias, señor Brito.

Abrimos un turno en contra. ¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.) ¿Grupo Mixto?

Don Gregorio Toledo.

El señor TOLEDO RODRÍGUEZ: Señor Presidente. Señorías.

Bueno, todos los grupos se han manifestado sobre lo que significa la publicación del real decreto. Para nosotros, como mínimo a esta Cámara y a todos los canarios, lo consideramos como una enorme falta de respeto. Entendemos que, por lo menos, hay que guardar las formas y que hoy era un día trascendental en que todos habíamos trabajado duramente. Está claro que la única vía que ya nos queda —estas son las ventajas del *rodillo*—, una vez publicado el decreto, es la elevación de un recurso de inconstitucionalidad, iniciativa parlamentaria que ya ha sido —porque este decreto lo conocíamos desde esta mañana— formulada por nuestra fuerza política, que tenemos el honor de representar.

Bien, hasta esta mañana simplemente era una honda frustración, el significado negativo que para Canarias iba a suponer la aprobación por el Gobierno de la nación de este proyecto de decreto-ley. Estaba claro o está claro cuál va a ser mi voto en este asunto, que paso a razonar dentro del escaso tiempo de que dispongo, por si pudiera influir en la decisión final de sus Señorías para que, al menos y siempre desde el punto de vista de la fuerza política y de la ideología que representamos, no se consume lo que interpretamos como otro atentado más al Régimen Económico y Fiscal de Canarias y a su desarrollo futuro en la línea que prevé nuestro Estatuto de Autonomía y la Constitución española. Me da la impresión de que el Pleno de esta Cámara, en base al procedimiento aprobado por la Mesa, tampoco, al menos en un principio, le prestaba demasiado interés, al menos según las manifestaciones que hemos tenido que escuchar y oír por la prensa.

Yo me resisto a creer que seamos nosotros, los propios canarios en este caso, los representantes legítimos del pueblo canario, quienes aceptemos entrar a informar este texto remitido por el Gobierno de la nación sin antes no solamente rechazar su contenido e incluso la forma y el procedimiento empleado. Entendemos que esta Cámara va a emitir hoy un informe sobre un texto que consideramos que es anticonstitucional en primer lugar, por cuanto establece o pretende establecer figuras tributarias derogadas por ley a través de un decreto-ley, estando

reservada esta potestad al Estado mediante ley. Les remito a ver el artículo 133.1 de la Constitución española. Y nos estamos refiriendo concretamente al establecimiento o restablecimiento en Canarias del Impuesto general sobre el Tráfico de las Empresas —ITE—, derogado por las Cortes Generales de la nación al aprobar la Ley 30/1985, de 2 de agosto, *del Impuesto sobre el Valor Añadido*.

Lo expresado anteriormente es más flagrante aún cuando por este decreto-ley se establece un nuevo impuesto especial para alcoholes y cervezas en Canarias contraviniendo, asimismo, el referido artículo 133.1 de la Constitución española, sin que, además, se haya realizado la consulta previa a este Parlamento. Efímera ha sido nuestra alegría al leer en la Ley del IVA que Canarias no estaba sujeta a dicho impuesto.

El Gobierno de la nación parece haber aplicado y corregido aquella constante histórica de que hagan las Cortes las leyes que yo haré los reglamentos. En este caso, que yo haré los decretos-leyes o, lo que es lo mismo, el Gobierno de la nación con el concurso estimable del Gobierno canario no ha querido ver ni entender lo que la Ley del IVA prevé. ¿Sería capaz este Parlamento de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional si este decreto-ley es finalmente aprobado por el Gobierno de la nación? Es obvio que este diputado propone que se analice esta cuestión y que se plantee, si procede y entiende, este procedimiento.

Señor Presidente del Gobierno y señor Consejero de Hacienda, no dispongo de tiempo para otras cuestiones, pero me basta con plantearle las siguientes preguntas que me sería muy grato que me fueran contestadas: ¿Qué fue de la renuncia que hace unas semanas había hecho el señor Solchaga, Ministro de Economía y Hacienda, al ITE en Canarias, cifrado en unos 9.000 millones, que la prensa destacó como el gran éxito del señor Saavedra, cuando en realidad todo ha sido un éxito efímero de la Ley del IVA, ahora conculcado por este proyecto de ley, al parecer con la participación del Gobierno y del señor Saavedra? ¿Por qué no se restablecen los tipos de arbitrios de lujo, tributo no derogado por otro procedimiento, sin tener que habilitar el Impuesto de Lujo, con lo cual hemos caído en la trampa de que el Gobierno de la nación nos intente restablecer el ITE de nuevo? ¿No era posible hacerlo modificando la Ley del Régimen Económico y Fiscal o por la ley de este Parlamento canario? ¿Es verdad que van a existir varios productos que en Canarias tendrán que soportar más impuestos indirectos —Arbitrio de Lujo, impuestos indirectos del Estado— que en la Península y Baleares, a pesar de aplicarse allí el IVA y la Tarifa Exterior Común —TEC—, como consecuencia de este decreto ley que hoy informamos —nos referimos concretamente a automóviles, tabaco, bebidas alcohólicas, operaciones financieras, camas hospitalarias, fletes, seguros, etcétera—? ¿Qué va a pasar con la desgravación fiscal

a la exportación que venían recibiendo las exportaciones de Canarias al extranjero? ¿Van a perderse aun estableciéndose el ITE de nuevo por este decreto-ley? ¿Por qué puestos a restablecer no se restablecen también aquellas normas que nos beneficiaban? ¿Por qué el Gobierno de Canarias, puesto a establecer y apoyar normas transitorias de larga duración, no deja transitoriamente las cosas como hoy están, solicitando que el Gobierno de la nación nos obsequie en estas Navidades con la noticia de que hasta tanto no se modifique el REF se va a respetar la legislación vigente en materia de imposición indirecta? ¿Por qué no se modifica, aunque sea parcialmente, el REF por ley para producir las adaptaciones que fueran precisas (*Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor Presidente*), siempre respetando el contenido de nuestro Estatuto de Autonomía y más especialmente su artículo 45, que preceptúa que Canarias goza de un régimen fiscal especial, basado en la libertad comercial de importación y exportación y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, que el decreto-ley que hoy informamos entendemos olvida una vez más? ¿Cuándo va a plantear el Gobierno de Canarias ante el de la nación un conflicto competencial y los recursos pertinentes por la constante conculcación del Estatuto de Autonomía y la legislación específica de Canarias en las normas de diversos niveles que de forma cotidiana emanan de varios departamentos de la Administración central desvirtuando nuestro REF y el protocolo especial de adhesión de Canarias a la Comunidad Económica Europea? ¿No es verdad que el Gobierno de Canarias está de acuerdo con este proyecto de decreto-ley por cuanto les permite formular en su día el anunciado impuesto canario a la producción del que participará en buena medida la Administración central?

Finalmente, y además del ruego de contestación, por parte del Presidente o del señor Consejero de Hacienda, de las preguntas formuladas, quiero expresar en esta Cámara mi firme convencimiento de que este decreto-ley está elaborado con la aquiescencia y, después de las palabras del señor representante del Gobierno socialista, del Gobierno de Canarias, lo que supone una actitud tremendamente centralista del Gobierno socialista y un atentado en profundidad a nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias y al procedimiento de consulta a esta Cámara. Este decreto-ley, cuando se ponga en vigor, supondrá una dura losa que pesará y condicionará la reforma del REF desvirtuando su contenido y su filosofía, y se apartará muy mucho de nuestra Ley de Puertos Francos.

Reclamo, pues, de los señores diputados un pronunciamiento unánime contra este decreto-ley, pues entiendo que con ello se hará un buen servicio a Canarias y que esta actitud no supondría ningún grado de insolidaridad con el resto de las comunidades españolas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Toledo. ¿Algún grupo o parlamentario más desea intervenir en este turno en contra? (*Pausa.*)

El señor Suárez Gil, por el Grupo Popular.

El señor SUÁREZ GIL: Señor Presidente. Señorías.

Quisiera comenzar mi intervención retrotrayéndome al Pleno anterior, donde toda la Cámara se manifestó en contra de la aplicación de los impuestos especiales en Canarias. El IVA, con su aplicación a partir del 1 de enero, sabemos que deroga lo que se denomina la Seguridad Social y Agraria, la Precinta, y el impuesto especial sobre alcoholes que venía a significar en Canarias una ...(*Ininteligible.*)

Bien. El Gobierno central hace con esto un *cajón de sastre* y por estos tres conceptos nos comenzarán a aplicar, a partir del 1 de enero, 330 pesetas por litro de alcohol absoluto, que viene a salir unas 330 por grado y litro. Muy bien. Pero el decreto dice, en su exposición de motivos: "En materia de impuestos especiales el presente real decreto mantiene la situación actual", etcétera, etcétera, "si bien implantando la estructura que para los mismos se configura en la nueva ley que los regula". Yo considero, considera mi grupo, que esto viene a significar una adaptación solapada a la Ley de Impuestos Especiales que ya rechazamos por unanimidad en esta Cámara.

Y yo quisiera ahora referirme a un tema, sangrante para todos los canarios, que es de la forma que se recoge el tema de las cervezas en Canarias. Bien. Si miramos las estadísticas en la España peninsular, por cada millón y medio de habitantes hay una fábrica de cerveza, millón y medio de habitantes; en Canarias por cada 500.000 habitantes hay una fábrica de cerveza, y encima, a pesar de que tenemos menos mercado, a pesar de esta situación, a pesar de que oímos reiteradamente la ayuda de que hay que mantener y consolidar las pocas industrias que tenemos, que hay que evitar que se sigan aumentando esos ya 153.000 parados que tenemos en este momento, pues no, nuestra cerveza aquí será muchísimo más cara. No vemos por ningún lado esta protección que se quiere hacer a la industria. Y nos encontramos con que, a no ser que al Gobierno hayan llegado unas cifras estadísticas por las cuales, digamos, nuestras tres fábricas que tenemos en Canarias el 60 o el 70% de su producción se venden en la Península... Yo no conozco esta cifra, pero en el caso que sea así los fabricantes tendrán la suerte de que recibirán devolución al entrar sus productos en la Península. Esperemos, el Grupo Popular va a recomendar a los fabricantes canarios que comience una operación de *marketing* para conseguir meter su producto en la Península para así conseguir devolución del impuesto que paguen aquí.

En la consulta y en el dictamen, en que se refería a si esto era el 45.3 o el 45.4, nosotros nos encontra-

mos con que desde que ya comienzas a leer ves cosas que las encuentras totalmente dicotómicas con la filosofía que si era el 45.4. Nos encontramos, donde dice que en el proyecto de real decreto-ley no se hace referencia alguna a la actual desgravación fiscal a la exportación; yo me imagino que si nuestra actual desgravación fiscal a la exportación no se recoge por ningún lado es señal de que está afectando al REF.

Pero nos encontramos todavía con algo más importante, porque lo peligroso es cuando en Canarias alguien comienza a hablar sobre el REF en plan de filosofía sin tocar la base fundamental que les afecta a los canarios, que es el tema de pesetas. Nosotros, cuando hablamos en economía, tal vez no entendamos de piano, tal vez no entendamos de tocar el clarinete, pero sí sabemos de números y sabemos de pesetas, nos encontramos con que igualmente nos vemos que dice, la cuestión que habrá de dilucidar en este punto, en donde ellos hablan de la naturaleza jurídica, es si esas alteraciones a las que nos hemos referido constituyen una modificación del REF de Canarias o si, por el contrario, constituyen una simple afectación. Y después, a continuación, dice: "la modificación y la afectación del REF son unos conceptos imprecisos".

Bien. Esto lo podríamos los canarios admitir si nosotros participáramos cada día más del Fondo de Compensación Interterritorial, que, casualmente, Señorías, desde 1983 a ahora, a 1985, con el beneplácito aparentemente del Gobierno, hemos perdido o hemos dejado de percibir 3.000 millones de pesetas. Igualmente debíamos también tener en cuenta, que no oigo por ningún sitio, no oigo manifestarlo, que lo mismo podríamos decir del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, en donde los municipios canarios están totalmente discriminados y nosotros, el Grupo Popular, considera que estamos dejando de percibir, arreglado a nuestros números, alrededor de 5.200 millones de pesetas.

Bien. Llegado a este punto, de la forma que está esto afectado, si en el Pleno anterior todos votamos que no, hoy igualmente se debiera votar negativamente este informe, voy a seguir hablando de pesetas. Bien. Canarias, a partir del 1 de enero —y lo digo alto y claro—, perderá 3.000 millones de pesetas por diferencia entre devolución de IVA a la exportación y actual desgravación fiscal a la exportación. Quiero decir aquí, porque a Dios gracias todo se corre y todo se entera, que España intentó en su momento negociar con la Comunidad Económica Europea, aunque estaba dispuesta a pagar los 50.000 millones de pesetas que le correspondían, tener un año —el año 86— sin aplicación del IVA. Muy bien. No se ha conseguido y el tema está así. Ya perdemos por este concepto 3.000 millones.

Muy bien. Ustedes saben perfectamente que las pocas industrias que nos quedan aquí, de transformadoras de productos del mar —las conservas—, están

siendo competitivas en los mercados africanos, fundamentalmente luchando con Marruecos, con Argelia y algún país más, asiático, donde tienen mano de obra muchísimo más barata que la nuestra y hay que tener en cuenta que en el cómputo global anual el concepto laboral tiene una gran implantación en el costo de las industrias, nos encontramos con que por desgravación fiscal a los productos canarios a la exportación estamos perdiendo, contado, peseta a peseta, 2.557 millones. Y sigo hablando de pesetas.

Bien. Al aplicarse el IVA en la Península, en Canarias se van a perder las reducciones del impuesto de compensación de gravámenes interiores que en 1984 —léase Pérez de Bricio— ascendió a 1.500 millones. Muy bien. Para nosotros —lo querrán desfigurar de la forma que sea— dejará de venir a Canarias o tendrán que salir de Canarias pesetas por valor de 7.000 millones de pesetas, que eso lo está perdiendo Canarias.

Bien. Pero vamos a hablar del ITE. Nosotros aquí queremos hacer un paréntesis para decirles que en algunos aspectos de fabricantes exportadores europeos estamos haciendo verdaderamente el ridículo. Estamos improvisando, en este momento está habiendo verdaderos problemas para hacer los escandallos de las empresas para el próximo año. Lo que el otro día definía como la incertidumbre, en este momento podría definirla como la improvisación, porque no hay que olvidarse de que desde el 2 de agosto ya se sabía en Canarias que esto se iba a producir. Pero en estos 24 impuestos que deroga el IVA y tres mecanismos, de los cuales dos nos afectan muchísimo, que ya he explicado antes, que son la desgravación fiscal a la exportación y las bonificaciones en el impuesto de compensación, está lo del Impuesto de Lujo.

Muy bien. Yo considero, considera mi grupo, que el verdadero problema es que estamos llevando un camino en economía que no se puede llevar. En economía las cosas deben ser pensadas, debe legislarse con paciencia, debe desarrollarse la ley con racionalidad, porque todo esto que es incertidumbre, todo esto que es improvisación, en este momento nos vamos a encontrar con que nos van a llevar a *marcha martillo*, con una gran velocidad, a ráfagas, a impulso, a una modificación del REF que, señores del Gobierno, señores socialistas, va a terminar como siempre siendo solamente su REF, no el REF de todos los canarios, no el REF consensuado de todos los que, nosotros, debíamos participar en ello. Será como siempre su REF, y como me imagino que estarán convencidos de que no siempre estarán sentados en el Gobierno, nos vamos a encontrar con que sectores sociales y económicos, cuando surja ese su REF, que no será consensuado sino será siempre su REF, porque lo harán todo sin consultar con nadie, aunque después digan de una forma ampulosa que se consulta, se habla y se consensúa, no sea a

través de "pactos de progreso", que ya muchos le están llamando "de regreso", nos encontramos con que, seguramente, ese REF no será algo sólido, no será algo constante, no será algo perdurable, que futuros gobiernos no solamente lo protegerán, sino lo considerarán aún más por la sencilla razón de que pura y exclusivamente, como siempre, será algo prácticamente hecho pura y exclusivamente por ustedes.

La economía es como una gran pared de ladrillos, señores socialistas, no se sabe si es más importante el tercero de la segunda fila o el cuarto de la quinta (*Risas en la sala.*). Me imagino que algunas personas, altos cargos del Gobierno que se rien en este momento, tal vez se reirán de palabras, de frases que leímos en los medios informativos, en los que se decía que el Gobierno central les había dejado con el glúteo al aire. Bien. Yo pienso que también con este decreto también les deja el Gobierno central con el glúteo al aire —y son frases tuyas, no son frases mías—. Ahí están publicadas y usted no las ha desmentido. Entonces, como venía diciendo, la economía es como una pared de ladrillo: no mueva usted un ladrillo sin ser de una forma ordenada, porque se le puede caer toda la pared.

Nosotros consideramos —y no les canso más, Señorías— que esto se puede definir como una *papela* hecha muy de prisa. En las intervenciones de antes, que todas son muy respetables, creo que todo el mundo se ha dedicado a hablar de forma... —todo el mundo ha hablado de que si el decreto, ya la sentencia—, pero hay algo que no se está teniendo en cuenta, y es el respeto que se le debe a esta institución, el respeto que esta institución le debe al pueblo y el respeto que el pueblo debe tenerle a esta institución. El respeto hay que ganarlo, y yo hago un planteamiento, no de forma como hasta ahora, sino hago un planteamiento de fondo: lo que ha hecho el Gobierno central de publicar ese decreto el día 23 —con salida el 24, porque saltó un error y ponerle ley— es a nuestro juicio como un problema de fondo, un ataque al cimiento central de esta institución. Y muy flaco favor le estamos haciendo al pueblo que nos ha elegido si no debiéramos en este momento, alto y claro, pedirle al Gobierno central que respete a esta institución y que, por favor, el Gobierno de Canarias no sea tan correa de transmisión de, pura y exclusivamente, lo que siempre pretende el Gobierno central.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez Gil.

(*El señor Consejero de Hacienda, Bergasa Perdomo, indica su deseo de intervenir.*)

El señor Bergasa tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE HACIENDA (Bergasa Perdomo): Señor Presidente. Señorías.

Yo lamento profundamente que sus Señorías —el diputado señor Toledo y el diputado señor Suárez Gil— se hayan dedicado en este Pleno a *gastar su pólvora en salvas*, tanto por lo que se refiere a las cuestiones que ha planteado el diputado señor Toledo en relación con la reforma de la imposición indirecta en Canarias, que el Gobierno se ratifica y mantiene la posición expresada en su momento por el Presidente, en el sentido de que en la reforma definitiva de la imposición en Canarias se van a integrar todas las figuras impositivas y, por lo tanto, se va a producir la desaparición del ITE en Canarias, la aplicación del ITE en Canarias; confundir los términos de esta cuestión con el tema que aquí nos ocupa.

Y en relación con el tema que aquí nos ocupa, yo tendría que decir a sus Señorías que, independientemente de que proclamen muy en alto que las cosas son como dicen ellos que son, las cosas son como son, porque los hechos son muy obstinados, y no como se dice que son. En primer lugar, el Gobierno de Canarias, en la negociación del contenido final de este real decreto-ley, que es un real decreto-ley emanado del Gobierno de la nación, ha escuchado a todos los sectores económicos implicados en el ámbito de aplicación de la imposición indirecta en Canarias. Y desde luego les puedo garantizar a sus Señorías que los sectores económicos consultados en órganos de representación y los sectores económicos consultados a través de organizaciones representativas de los sectores económicos han manifestado su acuerdo con el principio que se sostiene en esta norma, y es que durante el período transitorio que media desde el 1 de enero del 86 hasta el momento de la entrada en vigor de la reforma definitiva y adaptación de la imposición indirecta en Canarias se mantenga el *statu quo* fiscal en aquellos términos que en ningún caso puedan producir un perjuicio grave a la economía canaria. Y esos términos se contienen en el proyecto de real decreto-ley que en este momento está examinando el Parlamento, en los siguientes aspectos, porque me parece fundamental que, al margen de las concesiones que se hagan a las galerías, se diga cuál es el contenido de la norma que se está debatiendo.

Primero. Se mantiene la garantía de que en Canarias se pueda continuar aplicando el Arbitrio insular sobre el Lujo; es decir, un componente fundamental de la financiación pública de las Administraciones locales canarias que necesitaban esa garantía desde el momento en que a partir del 1 de enero del 86 podía entenderse —o alguien podía entender— que el artículo 24 de la Ley 30/1972, que es la norma de rango legal que crea el Arbitrio insular sobre el Lujo en Canarias, podía quedar falto de cobertura en cuanto a sus posibilidades de aplicación, artículo 1 del real decreto-ley, que permite, mediante la próro-

ga del texto refundido del Impuesto de Lujo, a los únicos efectos contemplados en el artículo 24, letras a) y e), de la Ley 30/72, es decir, a la posibilidad de que se continúe aplicando en Canarias el Arbitrio de Lujo en base a la ordenanza fiscal vigente y teniendo como límite máximo los tipos y hechos imponible contemplados en el texto refundido del Lujo.

En cuanto al Impuesto general sobre el Tráfico de las Empresas, impuesto que se aplica en Canarias en virtud de la autorización contenida en la Ley 30/1972, de 22 de julio, que es el instrumento legal sobre el cual se construye la imposición indirecta en el ámbito de la comunidad autónoma, vigente en este momento, y cuya prórroga se produce dentro del período de vigencia del texto refundido, de la Ley 6/79, de Régimen transitorio de la imposición indirecta en el ámbito del Estado, y por lo tanto mal cabe hablar de que una ley de efecto posterior, como es la Ley 30/85, por la que se crea el Impuesto sobre el Valor Añadido, en este preciso momento no está en condiciones de ser prorrogada mediante una norma con capacidad legal para hacerlo. Sin embargo, en la aplicación de los hechos imponible del ITE se eliminan todos aquellos hechos imponible que pueden significar, y de hecho serían una grave perturbación, para la exportación canaria en la medida en que los ITEs de fabricación, los llamados ITEs de ejecución de obra mobiliaria, podría entenderse, en virtud de lo que después explicaré, podría entenderse que perjudicaban las exportaciones canarias al no ser desgravables en los términos previstos en el Tratado de Roma, en cuanto a los impuestos especiales. Bueno, quiero decir con esto que mal cabe hablar de que se vaya a aplicar en el ámbito de la comunidad autónoma el texto refundido del Impuesto de Lujo derogado en el resto del Estado, porque está perfectamente y claramente establecido en el real decreto que ese texto refundido sirve únicamente como marco de referencia para la aplicación del Arbitrio insular sobre el Lujo, arbitrio que, en sus términos de aplicación, fue requerido el Gobierno, por los sectores económicos, de que no sufriera la más mínima alteración, por las razones que antes he explicado.

Los impuestos especiales. Mire usted, señor Toledo, y mire usted, señor Suárez Gil, los impuestos especiales se han aplicado en Canarias desde siempre. Y es más, en la Ley 30 existe una norma que habilita al Estado para aplicar en Canarias el impuesto especial sobre alcoholes y bebidas derivadas del alcohol. ¿Qué es lo que ha sucedido a través de la norma que está prevista en el real decreto-ley para adaptar la imposición especial en Canarias?

Primero. Que se ha tenido en cuenta el efecto diferencial que iba a producir la introducción del IVA en la Península a partir del 1 de enero del 86 en el sentido de reducir la carga fiscal que por tributación del Lujo estaban sufriendo las bebidas y derivados alcohólicos. Y en consecuencia, el Estado, a

través de la Ley de Impuestos Especiales que este Parlamento dictaminó en sentido negativo, el Estado ha incrementado la fiscalidad por impuestos especiales, y concretamente en el caso de los alcoholes y derivados alcohólicos, que es el único supuesto que se aplica en Canarias, para compensar la menor presión fiscal que esos productos, que esos hechos imponible, iban a generar a partir del 1 de enero del 86 como consecuencia de la aplicación del IVA.

Como resultado del tipo diferencial que se contiene en el proyecto de real decreto-ley, la presión fiscal por imposición especial en Canarias permanece constante en pesetas nominales de 1985, lo cual significa que en pesetas reales de 1986 la presión fiscal por imposición especial decrece en Canarias. Y que eso es así lo ratifica el hecho de que los sectores económicos fabricantes de bebidas derivadas del alcohol han manifestado su satisfacción por los términos en los cuales ha sido configurada la norma transitoria del real decreto-ley.

¿Por qué se aplica la estructura de fiscalidad, señor Suárez Gil, de la Ley de Impuestos Especiales aprobada por las Cortes Generales? Por razones de sentido común, porque la nueva fiscalidad exige establecer un ajuste fiscal por diferencia de tipos entre las bebidas fabricadas en la Península y gravadas en la Península y la exportación de esas bebidas al territorio de la comunidad autónoma. En consecuencia, ha sido coherente la solución que se ha aplicado en la imposición especial en Canarias durante el período transitorio. E insisto en el hecho de que es durante el período transitorio, fundamentalmente porque en la reforma definitiva de la imposición tendrá cabida la solución, la respuesta al problema de la imposición especial en Canarias, al igual que el resto de la imposición indirecta. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que, en lo que se refiere a carga fiscal y a fiscalidad, la situación permanece exactamente igual el 1 de enero del 86 que el 31 de diciembre del 85. No se ha alterado ni en un céntimo la fiscalidad. Las 3,30 por grado y litro que van a percibir, con la que se va a gravar a las bebidas y derivados alcohólicos el 1 de enero del 86, es exactamente la carga fiscal que por todos los conceptos que se estaban aplicando en la vigente Ley de Impuestos Especiales se aplican en Canarias, tanto por el específico de bebidas alcohólicas, el tipo de la Seguridad Social Agraria, la Precinta y los impuestos sobre cerveza.

Los impuestos sobre cervezas. Miren ustedes, en el Estado se ha reducido en la Ley de Impuestos Especiales el tipo aplicable a los tres epígrafes de la cerveza: cervezas con contenido superior al 13% y menor del 15, con contenido superior al 15 o con contenido inferior al 13%. ¿Por qué se han reducido los tipos en estos tres supuestos? Porque da la casualidad de que la industria de cervezas va a ser gravada por el IVA, cosa que no sucedía en la situación precedente, a diferencia de lo que va a suceder en

Canarias en donde la industria cervecera no va a estar gravada por el Arbitrio insular sobre el Lujo, porque no lo está gravando. Y la compensación de la carga fiscal que se produce por la disminución del tipo del impuesto especial va a operar a través del IVA. Por lo tanto, difícilmente se puede hablar de que nuestra cerveza soporte una fiscalidad superior, porque no es cierto, en términos absolutos ni en términos relativos.

En relación con el problema de la presión fiscal en Canarias. Miren ustedes, yo lo siento mucho, pero la presión fiscal en Canarias el 1 de enero del 86 desciende. Es decir, en castellano puro, es inferior a la presión fiscal que se está experimentando en este momento o que se va a experimentar hasta el 31 de diciembre del 85. ¿Por qué desciende? Porque la recaudación que el Estado obtenía por el Impuesto de Tráfico de Empresas en materia de ejecución de obras va a descender en una cifra superior a los 1.500 millones de pesetas y la desgravación fiscal por exportaciones canarias se va a mantener. ¿Cómo se va a mantener? En los términos que previenen el artículo 16 y el artículo 26 de la Ley 30/1972, que es la norma legal que nos capacita para poder aplicar sistemas de ajuste fiscal en frontera o de devolución en frontera, durante el período transitorio y en tanto no se produzca la reforma de la imposición indirecta definitiva en Canarias. ¿En virtud de qué normas? Pues muy sencillo, porque da la casualidad de que el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas entra en vigor, a efectos del cumplimiento de las normas derivadas del Tratado de Roma, el 1 de enero del 86. Y en el Tratado de Roma —y le invito a su Señoría a que lo estudie—, en el artículo 95 y siguientes fija las normas jurídicas, los soportes jurídicos que nos van a permitir, a partir del 1 de enero del 86, en colaboración con el Estado, evidentemente, que es el que tiene que producir la norma reglamentaria, nos van a permitir aplicar la devolución fiscal en frontera de aquellos impuestos indirectos que incorporemos a nuestras exportaciones. Evidentemente, las cuentas de compensación no serán las cuentas del Gran Capitán que presenta su Señoría, el señor Suárez Gil, sino serán cuentas de compensación fiscal basadas en la incorporación efectiva de carga fiscal en los productos que se exporten de Canarias y devolución fiscal en las fronteras de la comunidad ampliada, llámense fronteras de Península o llámense fronteras de cualquier país miembro de la comunidad ampliada, que permitan las normas del Tratado de Roma y las directivas comunitarias.

¿Cuáles son esas normas? Pues mire usted, el artículo 97 dice que los estados miembros podrán devolver los impuestos indirectos incorporados a los productos exportados, siempre que la carga fiscal pueda ser determinada con carácter exacto. ¿Qué sucedía con el Impuesto de Tráfico de Empresa a la ejecución de obra? Que no se podía determinar la

carga fiscal y, por lo tanto, infringía no solamente el artículo 97 del tratado, sino que infringía manifiestamente, y por supuesto lo han reconocido los negociadores de Bruselas, los negociadores españoles en Bruselas, pero es que además lo ha reconocido todo el mundo, que viola flagrantemente la regla tercera del Acuerdo general de tarifas y comercios suscrito por España. Por lo tanto, mal se puede decir que vamos a perder nada, cuando tenemos todos los instrumentos jurídicos adecuados para mantener el sistema de devoluciones fiscales en frontera.

Pero es que hay algo más. En la Ley de Impuestos Especiales, tan denostada, está previsto en su artículo 7 el mecanismo de la devolución fiscal en frontera de los impuestos especiales pagados por la industria canaria en la fabricación de derivados alcohólicos. Y es un mecanismo que está previsto también en el artículo 98 del Tratado de Roma, y existe directiva comunitaria para la devolución de los impuestos sobre consumos específicos. Por lo tanto, mal se puede decir que el artículo 16 o el artículo 26 de la Ley 30 están derogados. Lo que necesitan, y en eso está trabajando el Gobierno de Canarias en colaboración con el Gobierno de la nación, lo que necesitan es un instrumento jurídico para su aplicación el 1 de enero del 86, y ese instrumento jurídico yo les garantizo a sus Señorías que estará publicado en el *Boletín Oficial del Estado* antes del 1 de enero del 86.

En relación con esas cuentas del Gran Capitán a las que yo hacía antes referencia. Mire usted, señor Suárez Gil, la desgravación fiscal a la exportación evidentemente era una prima encubierta a la exportación que estaban recibiendo, no los canarios, sino que estaban recibiendo los fabricantes peninsulares y algunos comerciantes canarios. Porque yo les puedo decir a sus Señorías que, exactamente, en 10 años de vigencia del régimen de desgravación fiscal a la exportación, aplicable a los intercambios de Canarias con la Península, esta comunidad autónoma no se ha beneficiado ni de una peseta, ni de una sola peseta, en reducción de precios de productos fundamentales de consumo derivados de la desgravación fiscal a la exportación. Y si lo que su Señoría dice es que se han acabado las primas encubiertas que destruyen la capacidad industrial canaria que tiene que competir con un régimen de primas encubiertas a las exportaciones peninsulares, evidentemente ese sistema se ha acabado.

¿Que las producciones canarias no van a disponer de devolución fiscal en frontera? En absoluto, van a disponer de la misma. Lo que ocurre es que por primera vez vamos a saber en este país adónde van a parar las devoluciones fiscales en origen. Por primera vez sabremos si las devoluciones fiscales en origen van a parar al bolsillo de determinados señores o van a parar a los bolsillos de todos los ciudadanos, que son los que se deberían haber beneficiado en los últimos 10 años del régimen de primas a la

exportación que se ha aplicado en nuestro país. Y yo le puedo garantizar, y se lo digo con absoluta y total confianza, porque lo ha expresado la mayoría de los sectores económicos con los que el Gobierno canario ha tenido contacto, que en relación con el régimen transitorio no plantea ninguna duda, ninguna duda, y me sorprende que quien dice representar los intereses de las clases empresariales no tenga mejor información a la hora de enjuiciar normas de carácter fiscal que en el peor de los casos simplemente garantizan el mantenimiento del *statu quo* hasta el momento de la entrada en vigor de la reforma definitiva de la imposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bergasa. *(El señor Suárez Gil solicita el uso de la palabra.)*

Un momento, señor Suárez.

¿Don Augusto Brito quería replicar? Le recuerdo, don Augusto Brito, que la réplica es en función del artículo 71 del Reglamento y que dispone de un tiempo máximo de cinco minutos. Muchas gracias.

El señor BRITO SOTO: Procuraré, señor Presidente, ser respetuoso con el tiempo máximo de cinco minutos.

Respecto de la primera intervención habida—obviaré en cualquier caso, respecto de las dos, los aspectos que ya ha abordado el señor consejero, que ha dejado aclarado gran parte de los temas planteados—, no responderé a la parte retórica de la primera intervención, porque creo que no estamos aquí para hacer retórica, y me ceñiré a algunos puntos concretos que ha planteado.

Respecto del momento de la emisión del informe creo que nuestra posición ha quedado clara. Parece cierto que hubiera sido mejor momento el momento previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno. En cualquier forma, desde el punto de vista legal, señor Toledo, es clarísima la doctrina del Tribunal Constitucional expresada precisamente en sentencia referida a un recurso planteado por este propio Parlamento, que dice: "En el caso de los reales decretos-ley el momento adecuado es el momento previo a la convalidación". Es que lo dice perfectamente, y estamos justo en el momento previo a la convalidación, faltan 28 días para que llegue—se va a producir antes—, pero 30 días establece el artículo 86 de la Constitución para que pueda producirse la convalidación. Por lo tanto, resuelto ese asunto.

Por lo que respecta al segundo asunto, Ley de Impuestos Especiales. Señor Toledo, a salvo de que usted no se haya leído, a raíz del debate del otro día, la Ley de Impuestos Especiales, no entiendo lo que usted ha afirmado en relación con la misma. No es este real decreto-ley el que establece la vigencia para Canarias de la Ley de Impuestos Especiales, es la propia Ley de Impuestos Especiales, creo recordar

que en su artículo 2º, ley que me tuve que leer para el debate del otro día. Cuando a la hora de establecer el ámbito impositivo del impuesto, el ámbito de sujeción del impuesto, dice concretamente: "El impuesto especial sobre alcoholes y derivados será aplicable en toda España excepto en..."—y creo recordar que dice en Ceuta y Melilla—, y, por tanto, incluye a Canarias. El Impuesto sobre derivados del petróleo, el Impuesto sobre el tabaco, no serán aplicables en Canarias, Ceuta y Melilla.

Por consiguiente, la Ley de Impuestos Especiales y la estructura prevista en la Ley de Impuestos Especiales para el impuesto especial de alcoholes y derivados era aplicable en Canarias.

¿Qué hemos dicho nosotros el otro día—a salvo de que no se haya escuchado la argumentación del Grupo Parlamentario Socialista— cuando hemos votado que no? Hemos dicho, y lo hemos relacionado con este real decreto-ley, hemos dicho lo siguiente, señor Toledo, hemos dicho: "Dado que el IVA genera una presión fiscal en Península inferior a la presión fiscal que genera el Arbitrio sobre el Lujo en Canarias, tenemos que votar en contra de los tipos impositivos que se establecen en la Ley de Impuestos Especiales, que lo que tratan es de mantener el nivel de presión fiscal del antiguo texto refundido del Impuesto sobre el Lujo en relación con la nueva Ley de Impuestos Especiales. Dado que el IVA les reduce a ellos la presión en relación con el texto refundido del Impuesto sobre el Lujo, tuvieron que subir el tipo impositivo de la Ley de Impuestos Especiales para establecer el mismo nivel de presión fiscal. Aquí, como lo que se nos sigue aplicando es el Arbitrio de Lujo y no el IVA, teníamos que ir a un tipo impositivo inferior al previsto por la Ley de Impuestos Especiales, y por esa razón dijimos: En Canarias no se puede aplicar la Ley de Impuestos Especiales en la estructura prevista en la Ley de Impuestos Especiales, en el tipo de gravamen previsto en la ley de Impuestos Especiales, y tenemos que aplicar el tipo de gravamen previsto en este real decreto-ley. Si bien la estructura que se tiene que aplicar tiene que ser la misma, y tiene que ser la misma por una razón. En primer lugar, porque está vigente, porque lo dice el artículo 2 de la Ley de Impuestos Especiales; y en segundo lugar, porque si no no se podrían producir los ajustes fiscales en frontera, porque no existiría homogeneidad en el hecho imponible, homogeneidad en el conjunto de reglas básicas reguladoras del impuesto.

Yo creo que esta cuestión vale también para el señor Suárez Gil, que la ha planteado, vale también. Ésta es la explicación de nuestro voto el otro día. No se podía aplicar en puridad, en su totalidad, la Ley de Impuestos Especiales y había que aplicarla manteniendo la estructura de la Ley de Impuestos Especiales, como he dicho, para garantizar los ajustes fiscales en frontera en relación con los tipos impositivos previstos en este real decreto-ley.

Seguir con el señor Toledo. Adecuación de los tipos al IVA. Mire usted, señor Toledo, tendré oportunidad de profundizar un poco más cuando me refiera ahora al señor Suárez Gil. Tal cuestión fue planteada, incluso, por el Gobierno de Canarias en un posible planteamiento inicial de este régimen transitorio a los empresarios canarios. ¿Y usted sabe lo que dijeron los empresarios canarios? Que no se hiciera ninguna mención en este real decreto-ley al IVA, que no se hiciera ninguna mención, que mantuviéramos, y se acordó un poco la siguiente filosofía, que es la que nosotros mantenemos y la que nos parece que mantienen también los sectores económicos canarios. Otra cosa es que la derecha política en Canarias no responda a ese planteamiento. Desde luego muy extrañamente, porque el planteamiento es mantener en el período transitorio la misma situación que venía vigente con anterioridad, que venía como consecuencia de la Ley del REF, mantenerla en la misma situación, produciendo exclusivamente los ajustes imprescindibles para regular el comercio Canarias-Península o los ajustes fiscales imprescindibles para producir la adecuación con el nuevo marco impositivo de imposición indirecta estatal. Éste fue el planteamiento que se quiere llevar adelante, que se está llevando adelante. Entonces, no entiendo por qué usted ahora plantea esa adecuación de tipos a IVA, cuestión que ha sido estudiada y respecto de la cual los propios empresarios canarios dijeron que no, porque no querían una referencia al IVA. Tendremos oportunidad, en cualquier forma, en la reforma definitiva —y tal parece ser el criterio del Gobierno— de producir tal adecuación, de producir la adecuación de los tipos canarios, en principio, a lo que autónomamente estimemos adecuado y, en segundo lugar, presumiblemente, a regular los tipos impositivos canarios en tales hechos impositivos por debajo o, al menos, en el límite de lo dispuesto por el IVA.

Respecto del señor Suárez Gil, yo creo que le he contestado suficientemente en mi intervención anterior respecto de la desgravación fiscal a la exportación. Lo doy por contestado en lo que respecta a la Ley de Impuestos Especiales, creo que se lo he explicado ya. Por lo que respecta a la desgravación fiscal a la exportación, indicarle lo siguiente: lo que hace falta es una norma reglamentaria, un decreto que establezca el nuevo sistema de devolución fiscal adecuado al 95 del Tratado de Roma. Eso es lo que hace falta y eso se dará en tal forma que será eficaz el 16 y 26 de la Ley del REF, que siguen plenamente vigentes. No se derogan en este real decreto-ley en ninguna parte.

Por lo que respecta a un planteamiento de filosofía, un poco, que ha efectuado el señor Suárez Gil, yo le quiero contestar con otro planteamiento de filosofía. Vamos a ver, señor Suárez Gil, si de lo que usted está hablando es de aprovechar que una derecha económica de Canarias determinada quiere

aprovechar el período transitorio —esta fase de período transitorio— para que no se aplique en Canarias el ITE y no se aplique en Canarias la Ley de Impuestos Especiales, y producir en Canarias unos niveles de presión fiscal enormemente inferiores a los actuales y, en definitiva, llevar a Canarias, porque en definitiva de lo que se trataría es de establecer un sistema que luego, por vía de derecho adquirido, condicionara la reforma definitiva del REF, si de lo que se trata es de querer producir en Canarias un paraíso fiscal, desde la izquierda de Canarias le decimos que no, le decimos que no estamos en ese camino.

Y le digo algo más, mire usted, le digo algo más. Dice usted que vamos a hacer la Ley del REF los del pacto de progreso. Mire, los socialistas estamos teniendo —los socialistas de Canarias— importantes dificultades en la negociación tanto del REF transitorio como, sobre todo, las estamos teniendo en los inicios de negociación que se están produciendo del REF definitivo, de la reforma definitiva del REF, en relación con el Gobierno del Estado, porque ambos defendemos intereses legítimos. El Gobierno del Estado dice defender un interés legítimo y los socialistas canarios decimos que queremos un tipo determinado de nuevo REF que hemos explicado ya; que queremos la unificación de la imposición fiscal indirecta en Canarias, decimos, y decimos que queremos que esos recursos se recauden en Canarias, y no sólo que se recauden, sino tener la posibilidad de hacer política fiscal, tener la posibilidad de modificar los tipos, de modificar los hechos impositivos, etcétera, etcétera.

Mire usted, ésa es una tarea histórica, ésa es una tarea que significa un momento histórico para Canarias. Aquel momento histórico que, en conjunción con la nueva financiación que se producirá en los próximos días, las bases formuladas por el Consejo de Ministros, que en conjunción con la nueva financiación de las comunidades autónomas podrán determinar o no determinar una situación de suficiencia financiera para Canarias. Si usted lo que me quiere decir es que en este momento histórico, donde nos estamos jugando la suficiencia financiera para Canarias, donde nos estamos jugando, en definitiva, la capacidad de financiación que tenga la comunidad autónoma y la capacidad financiera que tengan los cabildos canarios, que en ese momento una cierta derecha económica de Canarias, sin conciencia del momento histórico, sin perspectiva de que hay que construir la región y que hay que fortalecer los cabildos, quiere eliminar recursos a los canarios para favorecerse sectorialmente, yo le digo a usted que no estamos por la labor; estamos, justo, por construir un sistema fiscal que sea capaz de dotar a Canarias de esa suficiencia financiera que, a la postre, será lo que nos permitirá construir Canarias social, económica y políticamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Brito. *(El señor Toledo Rodríguez solicita intervenir.)* Perdón, señor Suárez Gil, señor Toledo.

El señor TOLEDO RODRÍGUEZ: Señor Presidente. Señorías.

Señor Bergasa, no se ofenda por lo más mínimo, pero cuando yo le estaba escuchando, me recordaba a un querido colega parlamentario, el señor Xirinachs, que nos hizo un proyecto de Constitución que tuvimos que soportar todos los parlamentarios y que nos era muy difícil entender, porque la verdad es que era una Constitución de otra galaxia.

Usted, por lo que hemos podido escuchar, resulta que no represento a las fuerzas empresariales, que parece que aquí tienen otros portavoces, sin duda alguna; pero usted parece, por lo que yo le he podido escuchar, que los sectores empresariales canarios están totalmente de acuerdo con usted, con lo que acaba de hacer, con este decreto-ley prácticamente... En fin, o no leemos la prensa, por lo que yo pueda saber, o por las consultas que uno pueda hacer a título particular y privado, yo puedo decirle que otros sectores muy importantes que tienen unas siglas impresionantes, que andan continuamente manifestándose en los medios de comunicación, no parecen coincidir con lo que usted acaba de decir. De todas formas, sería muy bueno que esos sectores que dice usted que están de acuerdo, y que esta mañana a mí me manifestaban exactamente lo contrario, decidan cuál es la postura definitiva para el bien de todos y para saber qué es lo que estamos haciendo aquí unos y otros.

Y ya aprovecho y le hago la contestación conjunta al señor Brito. Yo retórico no creo que sea, incluso por formación profesional. Lo que pasa es que a usted no le puede gustar lo que yo digo, y en eso podemos estar perfectamente de acuerdo. Pero también las discrepancias respecto a este proyecto transitorio del REF, incluso por parte del —y también me estoy haciendo eco de la prensa— Partido Socialista, discrepa de Hacienda en el decreto-ley de adecuación del Régimen Económico y Fiscal. Éstas son cosas que nosotros no nos inventamos.

De todas formas, yo lo que comprendo y participo es de la enorme preocupación del señor Bergasa, y me imagino que de todo el Gobierno, ante un hecho trascendental e importante. En lo que no coincido, y no parecen coincidir, o todos estamos enormemente preocupados, es con lo que va a ocurrir. Yo no me quiero ahora volver a remitir a lo que significa si Canarias va a perder 9.000 millones y la imposibilidad en el REF, cuando ya tengamos que hacerlo dentro de seis meses definitivamente. Al aprobar este decreto-ley, eso puede hacer perder unas basas importantes, etcétera, etcétera, porque eso ya, desgraciadamente, lo veremos y lo veremos a muy corto plazo.

En definitiva, que cada uno asuma su responsabilidad. Yo respeto todos los criterios. Yo creo que el señor Bergasa tiene que estar enormemente preocupado, como así su Gobierno perfectamente, y lo han manifestado en reiteradas ocasiones.

En definitiva, y para terminar, también me ha expuesto argumentos jurídicos constitucionales acerca de la viabilidad del procedimiento, que sí, yo sigo diciendo que la forma no es correcta desde el punto de vista de la ética política, que es muy importante de cuidar, máxime en unos momentos tan trascendentales para todos. Y no dude su Señoría, el señor Bergasa, de que todos los parlamentarios que estamos hoy aquí, por encima de ideologías, todos estamos pensando en Canarias, absolutamente todos. Usted defiende en estos momentos lo que usted cree y me parece correcto. Nosotros opinamos que se está equivocando, que está cometiendo un grave error. Bueno, repito que el tiempo lo va a decir, pero yo en ese sentido sí que quiero dejar las cosas bien claras y que no se trata de ofender a nadie ni a nada, sino que usted está exponiendo una defensa de cuál es su parecer en un hecho tan importante. Yo por eso le aplaudo. No se enfade, no manifieste ningún tipo de esas cosas, y nosotros estamos exponiendo lo contrario con el mejor criterio también y asumiendo un acto de responsabilidad enorme que es éste. Desde ese punto de vista, un debate parlamentario en ese sentido me parece enormemente productivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Toledo. Señor Suárez Gil, por favor.

El señor SUÁREZ GIL: Señor Presidente.

Bien. Es grato ver que se van decantando, dentro del quién es quién se van situando cosas en su sitio.

Señor Brito, tenga usted la completa seguridad —señor Brito, don Augusto— de que me honra que usted me pueda decir que no represento a los sectores económicos. Estoy aquí elegido por el voto popular, y ya se ha demostrado, tanto mi grupo como el que habla, que nuestra gran preocupación son otros sectores mucho más marginados y sectores que fueron muy protegidos y sectores que fueron muy prometidos, y que en este momento se encuentran prácticamente al borde de lo que todos sabemos.

Aquí se habla de que estamos intentando buscar apoyo para sectores económicos específicos; usted ha dicho que se sorprende de nuestra postura. Yo le agradecería que aquí y ahora dijera usted qué sectores económicos están totalmente de acuerdo con los planteamientos de ustedes, porque tanto en el día de ayer, en mi casa, como hoy en el despacho no he recibido nada más que llamadas para decirme una serie de calificativos que no digo por la cortesía parlamentaria referente a esto que se trae aquí esta tarde, porque una cosa es escuchar lo que dicen los sectores económicos, otra

cosa es dar a entender que se acepta todo un planteamiento, todo un *pastel*, y al final ustedes cortan del *pastel* lo que más les conviene, que, en definitiva, es el apoyo a lo que quiere el Gobierno central, y el resto ahí se queda, como el hueso de la chuleta. Señor Brito, don Augusto, una chuleta es hueso y carne, y en este momento ustedes solamente están barriendo la carne para la Administración central y están dejándole a ustedes el hueso al sector económico de aquí.

Habla usted de los cabildos. ¡Pero, Señorías, ustedes tienen que acordarse de quién ha intentado debilitar más el seno de los cabildos que el Gobierno socialista! ¿Quién ha sacado una ley totalmente de apoyo y consolidación de los cabildos y corporaciones locales sino el Grupo Popular?... Por favor, seamos serios.

¿Qué es lo único que está pasando aquí? Muy bien, aquí lo único que está pasando es que se intenta sacar esta *papela* sin un costo político, un costo real, porque yo no he dicho en ningún momento que quiero un paraíso fiscal; yo de lo que estoy hablando es de algo que yo defino como que los flujos financieros se mantengan de forma racional. A lo que aquí no se ha dado respuesta clara es a que nosotros decimos que el ITE y los impuestos especiales se cobren y se queden en Canarias para poder compensar, ¡para poder compensar!, los 7.000 millones que dejan de venir a Canarias. A nadie se le oculta que hace algo más de dos años por el ITE se recaudaba en Canarias alrededor de unos 4.000 millones. Después de una presión fiscal que se podía denominar de feroz se consiguió llevar eso a más de 7.000 millones. Y esos 7.000 millones y los 1.800 millones de los impuestos especiales se marchan de aquí para la Administración central, y en contrapartida nosotros en este flujo de capitales no recibimos compensación alguna, y lo que nosotros decimos es que se cobre, pero que como compensación se queden aquí en Canarias, no que se vayan a la Península.

Bien. Y al Gobierno termino manifestándole que en cuestiones de criterio huelga toda discusión, ya que siempre tiene razón el que está en el ministerio.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez Gil.

El señor Bergasa tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE HACIENDA (Bergasa Perdomo): Señor Presidente. Señorías. Señor Toledo.

Lamento que su Señoría haya apreciado en mi tono elementos de agresividad, que no era mi intención en ningún caso. Quizás se haya debido al calor del debate y a la defensa de los argumentos que he utilizado. En ningún caso existía esa intención y, desde luego, parto de la base de que su Señoría defiende los intereses generales de la región desde una posición muy específica y muy particular.

Yo lo único que voy a añadir es que —porque parece que no se dice con suficiente énfasis— no se incrementa la presión fiscal en Canarias y que, en consecuencia, puesto que permanece prácticamente invariable durante el período transitorio el sistema de fiscalidad vigente, mal se puede hablar de que se introduce ningún elemento nuevo que pueda significar una perturbación grave de la economía canaria. Los que venían soportando el ITE, por los diferentes hechos impositivos que se aplicaban en Canarias, lo van a seguir soportando, excepto el supuesto que ya he dicho, el supuesto de ITE de ejecución de obra mobiliaria o de fabricación, si se prefiere.

Y ya he explicado las razones que justifican el porqué se ha acudido a la fórmula de integrar la estructura del tipo fiscal de impuesto especial en la misma estructura de aplicación en el resto del territorio nacional por el problema de los ajustes fiscales en frontera, ya que los canarios vamos a pagar menos impuesto especial que el que va a soportar un fabricante peninsular por el mismo hecho imponible. En consecuencia, entiendo que mal se puede hablar de una modificación o de una alteración de la situación de fiscalidad. Lo que sí es claro —y eso es lo que en definitiva el Gobierno ha pretendido decir— es que todos estos temas van a ir necesariamente al proyecto de reforma y adaptación definitiva de la imposición indirecta en Canarias.

Y paso con esto a responderle en parte a los argumentos que ha utilizado el señor Suárez Gil. Evidentemente, insisto en que esa respuesta nada tendrá que ver, porque nada puede tener que ver, con una cuenta que yo he definido —si ustedes quieren inoportunamente— como del Gran Capitán, pero que tiene muchas características parecidas a las cuentas del Gran Capitán.

Mire usted, el ITE, en el año 1984, produjo una recaudación bruta al Estado —bruta—, en todo el territorio de la comunidad autónoma, de 7.345,5 millones de pesetas, de los cuales el Estado devolvió, según las cifras que obran en la Dirección General de Aduanas, devolvió 1.050 millones de pesetas en concepto de desgravación fiscal a las exportaciones canarias que incorporaban ITEs de fabricación. Por tanto, la cuenta neta por el concepto de ITE en Canarias, sin tomar en consideración ahora lo que son los ingresos indebidos y las diferencias por cobros indebidos, podemos situarla en el entorno aproximado de los 6.000 millones.

Y los ingresos por impuestos especiales en el 84 fueron 1.545,8 millones de pesetas en ingresos brutos, sin tener en cuenta la devolución fiscal por exportaciones de bebidas alcohólicas, que no es muy importante, porque Canarias no es una región netamente exportadora de derivados del alcohol, de bebidas derivadas del alcohol, pero ésta es la cifra. En 1985 esta cifra puede alcanzar los 2.000 millones de pesetas como consecuencia de la revisión de los tipos que se hicieron en la Ley de Presupuestos de 1985, en la que se incrementó el tipo de Precinta y se incrementó el coste de la Seguri-

dad Social Agraria. Por lo tanto, se podrá alcanzar en 1985, en cuenta bruta de ingresos fiscales, una cifra parecida a los 2.000 millones de pesetas, que en cuenta neta de ingresos fiscales será algo menor, será en el entorno de los 1.800 millones.

En total, la fiscalidad por impuestos indirectos que subsiste, porque aquí nadie ha hablado de los que desaparecen; nos olvidamos de que, además del ITE de fabricación, desaparece la tasa de espectáculos, desaparece la tasa de bebidas refrescantes, desaparece el Impuesto de compensación de gravámenes interiores, que se aplicaba al comercio de Estado, y desaparece la tasa sobre teléfonos. Todos estos hechos desaparecen y suponen, en conjunto, una recaudación total para el Estado superior a los 500 millones de pesetas en el territorio de la comunidad autónoma, que el Estado no va a aplicar de nuevo en el año 1986 ni durante el período transitorio. Estamos hablando, por lo tanto, de una reducción real de la presión fiscal del orden de los casi 2.000 millones de pesetas en pesetas de 1985, que no van a soportar los ciudadanos canarios en la comunidad autónoma, por lo menos durante el período transitorio. Cuando se produzca la reforma definitiva y la adaptación definitiva de la imposición, ya veremos.

Y en cuanto a la cuenta de desgravación fiscal a las exportaciones peninsulares, yo lamento tener que volver a insistir en el mismo argumento que empleé antes, y que yo creo que es muy claro: la desgravación fiscal a las exportaciones con origen en la Península y destino en las Islas Canarias es una cuenta que le interesa mucho a los fabricantes y exportadores peninsulares, pero que a los canarios nos tiene verdaderamente sin cuidado, porque no tiene ningún efecto, en términos económicos, sobre el comercio y sobre la actividad económica canaria, o no ha tenido ningún efecto económico sobre el comercio o la actividad canaria. Cuestión distinta es pensar que en el régimen de devolución fiscal por IVA no se va a producir una situación equivalente, que yo creo que es pensar más de la cuenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bergasa.

Para la fijación de posiciones pueden intervenir, al no haber intervenido con anterioridad en el turno en contra, el Grupo Izquierda Canaria y el Grupo CDS. ¿Van a intervenir?

Don Antonio Sanjuán.

El señor SANJUÁN HERNÁNDEZ: Señor Presidente. Señorías.

Es indudable que la nueva estructura de la imposición indirecta a nivel del Estado, que no tiene aplicación en Canarias, obliga a que tengamos que reformar profundamente nuestro Régimen Económico-Fiscal. Pero mientras tanto tengamos en nuestro poder esta ley, lo que no podemos impedir es que se produzca una laguna fiscal que quiere cubrir este real decreto-ley.

No vamos a entrar en el contenido ni en la forma de este real decreto-ley, en algunos de cuyos puntos tenemos importantes reservas. Vamos a empezar diciendo que vamos a apoyar la fórmula presentada o el informe presentado por el Partido Socialista, con algunos matices que más adelante indicaremos.

No cabe duda de que, desde hace varios meses, se está produciendo a nivel de toda Canarias —y sobre todo de los sectores interesados— una serie de posiciones frente al futuro REF canario, a esa imposición indirecta que vamos a tener dentro de pocos meses. Y nosotros vamos también a empezar ya —porque creo que los demás grupos deben hacerlo también—, a empezar a fijar cuál es nuestra posición política con respecto a este cambio en profundidad del REF.

Por un lado, observamos nosotros una tendencia que propugna el inmovilismo fiscal e, incluso, obtener con la reforma una menor presión fiscal que la que hasta ahora ha generado el REF. No olvidemos que esta ley surge en 1972, época en que la coyuntura económica canaria se encontraba en lo alto de la ola y fue fruto, indudablemente, de una transacción entre los intereses predominantes de los sectores decisivos de la economía canaria y los nuevos intereses de los grupos financieros estatales a escala nacional. Ése sí que fue un REF hecho a la medida de los sectores interesados.

Partiendo del reconocimiento de que la autonomía canaria tradicionalmente se ha caracterizado por una estructura intermediaria, con predominio absoluto del sector comercial, a partir de 1972 el comercio en Canarias ha perdido terreno en su relación de intermediación con el mercado externo. Característica predominante hasta entonces para convertirse en intermediación de las grandes empresas nacionales. Esto se tradujo a partir del REF en que el régimen tradicional y mítico de los puertos francos se debilita enormemente. El REF fue en realidad un *traje cortado a la medida* de quienes dominaban la economía canaria de los años 70.

Por otro lado, la posición de aquellos que defendemos una modificación profunda de la imposición indirecta en Canarias que, sin que ello suponga un aumento de la presión fiscal en nuestro archipiélago, siente las bases para crear una hacienda canaria con capacidad de respuesta, no sólo para las necesidades inmediatas, sino que permita instrumentar los elementos constitutivos de lo que debe ser nuestra hacienda en el siglo XXI.

Ante este proyecto de real decreto-ley, que se somete a la audiencia del Parlamento canario, nuestro grupo defiende y exige a la Cámara que exhorte al Gobierno para que la reforma del REF se lleve a cabo con la máxima urgencia posible. Hay que procurar que la vigencia del real decreto-ley no sobrepase los tres meses. En eso discrepamos del informe socialista, que deja el campo a todo el año 86 para la reforma del REF.

Hay sectores claramente interesados en que la reforma del REF se aplase lo más posible; son los que propugnan una importante disminución en la presión fiscal en Canarias. Es decir, los que quieren convertir a Canarias en un paraíso fiscal, aunque ello conlleve convertirla en un infierno social. Son los que defienden una estructura fiscal tercermundista, donde junto a enormes beneficios para unas minorías subyace la más espantosa de las miserias.

En la formulación de informes por los diferentes grupos parlamentarios quedan patente las diferentes posturas ante cuál debe ser la estructura que defina la imposición indirecta en Canarias, que la reforma del REF ha de contemplar necesariamente. Es en materia fiscal, señores diputados, donde de verdad han de definirse los diferentes grupos políticos presentes en esta Cámara frente a qué concepción se tiene de Canarias; si queremos una Canarias progresista, cuyo desarrollo ha de fundamentarse en la política de protección a las capas sociales más débiles de la sociedad canaria o, por el contrario, se pretende mantener el *statu quo*, e incluso favorecer a los sectores económicos disminuyendo la presión fiscal a costa de una mayor degradación de la situación social. Éste es el grave problema que tenemos planteado y el que tiene que dilucidar esta Cámara y todo el sector canario.

Las autodefiniciones de progresismo de determinados grupos parlamentarios huelgan cuando se fijan posiciones en materia impositiva con una clara línea retrógrada y divorciada de la cruda realidad de la situación de nuestro archipiélago. Los *populismos* y las demagogias afloran inevitablemente en temas tan vitales como definir la estructura de la hacienda canaria. Una hacienda que no permita disponer anualmente de 40.000 o 50.000 millones de pesetas para la inversión, de no alcanzar ese objetivo en los próximos años la situación canaria alcanzará niveles explosivos que ningún gobierno, ningún partido político, pueda soportar.

Apoyamos en este sentido la propuesta del Partido Socialista, con la diferencia y el matiz de que debe hacerse cuanto antes la reforma del REF; no esperar a todo lo largo del año 86, sino hacerlo cuanto antes, y procurar que este decreto-ley no sobrepase los tres meses de vigencia.

Nada más, Señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanjuán.

¿Grupo CDS va a intervenir? No.

Pasamos a continuación a las propuestas de informe presentadas por los Grupos Mixto, CDS y Grupo Popular.

Para la presentación y defensa de su informe, en función de que hay prioridad en el tiempo de presentación de dicha propuesta, tiene la palabra don Osvaldo Brito.

El señor BRITO GONZÁLEZ: Señor Presidente, planteo con carácter previo y con la lealtad parlamentaria más clara un problema de orden, y es el siguiente, señor Presidente: yo he sido convocado a este Pleno para tratar como punto único del orden del día —se habla— "Proyecto de Real Decreto-Ley sobre adaptación de la imposición indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla". En ese sentido, la resolución o la propuesta de resolución y de informe que se ha realizado en nombre del grupo parlamentario del cual soy portavoz, a iniciativa del diputado que habla, se ha basado en el texto del Proyecto de Real Decreto-Ley sobre la adaptación de la imposición indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla, que en el documento remitido por el Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de Canarias, don Jerónimo Saavedra, incluía un texto distinto del que hoy se presenta en un real decreto publicado en el *Boletín Oficial del Estado* número 306 y rectificado en el *Boletín Oficial del Estado* número 307, en cuanto a que en la parte final expositiva se decía: "en su virtud, emitido el dictamen preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, previa la deliberación del Consejo de Ministros de fecha... —quedaba abierto— se acuerda lo siguiente".

En este sentido hay claramente, señor Presidente, un problema de indefensión, porque, curiosamente, viendo las resoluciones presentadas al efecto, la única propuesta de informe para resolver que se ajusta —y ha sido admitida por la Mesa— a lo requerido es concretamente la presentada, curiosamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, que dice: "Disposición adicional ...(Ininteligible...) respecto al Real Decreto Ley del Gobierno de la nación", cosa que tenía que haber sido, en su caso, rechazada o pedida su adaptación, porque el punto era Proyecto de Real Decreto. Se conocía, por tanto, el decreto y ésta es la propuesta que efectivamente se plantea a este nivel.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento, yo pido en este caso que, como mínimo y por un criterio de equilibrio y de funcionar con el Reglamento en la mano, se pueda plantear una reconsideración de la propuesta de informe. Porque no es lo mismo presentar una propuesta de informe sobre un punto que se modifica sobre la marcha ante una *incontinencia*, digamos —que vamos a calificarla así—, que no estaba prevista, ni este diputado y su grupo pudieron prever en el momento oportuno.

Éste es un tema de fondo, importante, que quiero plantear, y pediría en este sentido una consideración conjunta de la Mesa y de la Junta de Portavoces, porque el tema es muy serio, porque evidentemente aquí, si no, hay una situación clara de indefensión, y el único informe que se puede someter a consideración de la Cámara es el que se presenta al real decreto-ley del Gobierno de la nación. Entonces, en este sentido, yo quisiera que este tema, con carácter

previo, se aclarase antes de proseguir con el planteamiento de la defensa de la iniciativa que por el Grupo Parlamentario Mixto se ha planteado (*Pausa.*).

El señor PRESIDENTE: Su Señoría, don Oswaldo Brito, sabe perfectamente que puede ejercitar las facultades que le concede el artículo 28.2 del Reglamento: presentar un escrito de reconsideración, que será visto por la Mesa de la Cámara en su momento oportuno.

En cuanto a lo que se está debatiendo aquí, aquí no se está debatiendo el real decreto-ley publicado en el *Boletín Oficial del Estado*, sino se está debatiendo el proyecto, tal como lo dice el orden del día, y su Señoría debe ceñirse a la cuestión, y por consiguiente sus argumentaciones deben versar sobre el proyecto... (*Rumores en la sala.*)

¡Silencio, por favor!

El señor BRITO GONZÁLEZ: Señor Presidente, entonces yo aquí, en un recurso *in voce*, porque, claro, no se puede trasladar un tema a un acto parlamentario posterior, yo impugno, en concreto, *in voce*—y pido la resolución sobre la marcha, porque se está tramitando—el que no está ajustada esta propuesta de informe a lo que se plantea en el orden del día como proyecto de real decreto, sino se hace referencia al real decreto-ley del Gobierno de la nación, que al ser publicado y presentado en la fecha en que está ya estaba publicado en el *Boletín Oficial del Estado*.

Señor Presidente, quiero una aclaración al respecto, porque esto es muy grave.

El señor PRESIDENTE: La aclaración está muy clara. O sea, el artículo 28.2 dice cuáles son los escritos que deben presentarse sobre reconsideración de acuerdos de la Mesa y no ha lugar, por consiguiente, a ninguna impugnación *in voce* como su Señoría ha establecido. Porque, en todo caso, tampoco son recursos lo que el Reglamento establece, no son recursos, sino escritos de reconsideración. Por consiguiente, no ha lugar a una impugnación *in voce*.

El señor BRITO GONZÁLEZ: Señor Presidente, pues, quedo *sotto voce* (*Risas en la sala.*), porque, evidentemente, no sé cómo voy a plantear un recurso de consideración sobre una cuestión que se va a tratar y someter a debate en este caso. Me parece que lo prudente en el trámite parlamentario hubiese sido el plantear una convocatoria, como he podido, con la Junta de Portavoces, a la cual tengo derecho conforme al Reglamento, y haberse clarificado este tema.

El señor PRESIDENTE: Prudente quizás hubiese sido que en la Junta de Portavoces anterior al Pleno, su Señoría, que estuvo presente, hubiese planteado el problema. Ahora ya no es prudente.

El señor BRITO GONZÁLEZ: Más prudente, señor Presidente, es que el señor Presidente del Gobierno, que tenía conocimiento del decreto y es el que tramita esta solicitud de informe a la Cámara, la hubiese retirado en ese acto, diciendo concretamente delante del Gobierno que ya no ha lugar, porque estaba el proyecto publicado. Y tampoco lo hizo ni manifestó nada al respecto, estando el señor Vicepresidente del Gobierno como portavoz del Gobierno presente.

Bien. Quedada la cuestión *sotto voce*, pues evidentemente vamos a pasar a defender lo que ya aparece como indefendible, pero, bueno, vamos a defenderlo, y luego al final vamos a manifestar cuál va a ser, por coherencia, nuestra posición en torno a la propuesta que habíamos formulado.

Lo primero que hay que resaltar en este debate, que algunos han querido dejar reducido a un tema meramente formal, meramente accidental, es una cuestión, sin duda, importante. Primera. Según afirma el señor Saavedra, el señor Presidente del Gobierno—en este momento ausente de la Cámara—, en unas manifestaciones públicas, se dice que el decreto de medidas transitorias no modifica el REF. Dice, concretamente más, que "el Parlamento autónomo verá afectada negativamente su credibilidad institucional si el próximo día 26 informa desfavorablemente el real decreto que regula el período transitorio del REF", lo cual son dos cuestiones por sí mismas graves. Porque, curiosamente, en escrito presentado el 11 de diciembre, con fecha de registro 12 de diciembre de esta Cámara, el Excelentísimo señor don Jerónimo Saavedra Acevedo dice—dirigido al Presidente del Parlamento de Canarias—: "Excelentísimo señor: a los efectos del trámite de informe preceptivo previo, previsto en el artículo 45.3 de nuestro Estatuto de Autonomía"... ¡45.3 de nuestro Estatuto de Autonomía! Por tanto, se está hablando en el escrito que ha presentado el Presidente del Gobierno de una modificación del REF, cosa que después dice públicamente que no es así.

Pero vamos más lejos. Tal es así la conciencia que tiene el Gobierno central de que el tema requiere el informe preceptivo, que al final de la parte expositiva del preámbulo del real decreto-ley dice: "En su virtud, emitido el dictamen preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, previa deliberación del Consejo de Ministros del día—que queda abierto—de 1985, y en uso de la autorización contenida en el artículo 85, dispongo". Quiere decirse que el Gobierno central ya había previsto en este informe que ahora no podemos ya resolver, sino cuando se vea el trámite de reconsideración oportuno, pues evidentemente en este planteamiento concreto se reconoce por el propio Gobierno central que el trámite era preceptivo y era previo, porque así se plantea en el propio documento del Gobierno.

Por tanto, no son cosas formales, no son cosas accidentales, son contradicciones muy importantes,

porque esto sí que afecta a la credibilidad de la comunidad autónoma y a la credibilidad del propio Gobierno de la comunidad autónoma en sus actuaciones, aparte de las que ya se ha hablado que bastante fuego han dado a la situación política en el archipiélago.

Segunda cuestión importante, que sólo se ha planteado y se ha pasado un poco de puntillas. El tema de que si, efectivamente, como tal se reconsideró la postura inicial de que no era el 45.4, sino el 45.3, hay que plantearse una cuestión, y es que se ha incumplido de forma rotunda y grave lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley reguladora del Consejo Consultivo de Canarias, en cuanto que en esa ley se indica que es preceptivo el informe del Consejo Consultivo cuando se trate de la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Y aquí no se ha dado ningún trámite al Consejo Consultivo.

Y más aún. Fíjense ustedes, vamos a plantear hoy una votación de dictamen a un real decreto ya publicado, cuando queda un período de tiempo—se dice—de 30 días para su convalidación, cuando lo normal era suspender el Pleno, cumplir con el trámite preceptivo del Consejo Consultivo y traer después a Pleno concretamente el real decreto ya publicado con el informe preceptivo cumplimentado, a consideración de la Cámara, porque queda tiempo más que suficiente siguiendo el argumento antes explicitado.

En cuanto al tema de que no se modifica el REF, yo quiero traer aquí a la memoria unas palabras de un miembro—digno miembro—de este Parlamento, que en otra época—yo quiero recordar en aquella época en que estaba planteado el espíritu del 22 de junio, que tanta polémica organizó y tanto cambio propició—; pues, evidentemente, hablaba de que lo importante no eran los principios librecambistas que configuraban al REF, sino lo importante era el refuerzo de tipo legislativo, de tipo procedimental, que impedía que el Gobierno central y que impedía que el Gobierno rectificase el REF de una forma irregular. Parece ser que todo eso *pelillos a la mar*. El problema se convierte en amnesia política, cosa frecuente por estas latitudes, y evidentemente aquí no ha pasado nada.

Pues sí se modifican cuestiones importantes. Y miren ustedes, no es un tema—que antes me sorprendió cierta intervención del señor Consejero de Economía—accidental el hecho de que, por ejemplo, se plantee el que se retoma de nuevo, después de haber sido derogada por la propia Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la disposición final segunda, señor consejero, y no dice "excepto en Canarias", sino que lo dice con carácter general. Y dice, por ejemplo: "el día 1 de enero de 1986 quedarán derogadas las siguientes disposiciones: a) Decreto 3.314/66, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas y demás disposiciones reguladoras de dicho impuesto; Real Decreto Legislativo 875/81, del Texto refundido del Impuesto sobre el Lujo y sus disposiciones complementarias; c)

Las normas reguladoras del impuesto especial sobre bebidas refrescantes; d) Decreto 2.169/64, de 9 de julio, por el que se regula el Impuesto de Compensación de gravámenes interiores. Y así, el Decreto 1.255/70, de 16 de abril, por el que se regula la desgravación fiscal a la exportación y sus disposiciones complementarias.

No dice que se derogan para el territorio de Península y Baleares, se dice que se derogan con carácter general. Y ahora, a lo dispuesto en una derogación de la Ley del IVA, se viene a plantear por vía de real decreto-ley una modificación, volviendo a dar vida al texto refundido de la Ley del Lujo y al tema también del Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas. Esto es una barbaridad de tipo jurídico y de tipo procedimental que no tiene ningún soporte en ningún caso.

Pero más aún. Su consejería era consciente, y no me diga usted aquello de que el documento sólo vale cuando viene certificado. Mire usted, la fotocopia, después, si queremos, la certificamos, pero aquí dice: "Gobierno de Canarias, Consejería de Hacienda. Propuesta de borrador de anteproyecto de real decreto-ley por el que se modifica el artículo 24 de la Ley 30/72, de 22 de julio". Y dice la Consejería de Hacienda: "El Arbitrio insular sobre el Lujo, vigente en Canarias, está sujeto a las limitaciones establecidas en la Ley 30/72, de 22 de julio, relacionándolas con las normativas reguladoras del Impuesto sobre el Lujo". A) No podrá someterse al arbitrio ningún producto que no esté sometido al Impuesto sobre el Lujo, artículo 24.2 a); b) Los tipos de las tarifas del arbitrio no podrán ser superiores a los del Impuesto estatal sobre el Lujo—artículo 24.2 d)—.

Dice después: "La derogación, por entrada en vigor del IVA, del Impuesto sobre el Lujo determina la necesidad de reforma parcial del artículo 24 de la Ley 30/72, de carácter transitorio hasta la aprobación de la ley de modificación del REF, mediante la supresión de la vinculación del Arbitrio insular sobre el Lujo en Canarias en relación con el impuesto estatal y su conexión con el Impuesto sobre el Valor Añadido, ajustándose a los tipos vigentes del IVA, con el fin de evitar una mayor carga fiscal en el archipiélago que en el resto de España". Esto dice la Consejería de Hacienda. No me lo invento yo, sino que está en este documento.

¿Qué quiere decir? Que el argumento que usted ha expresado hace muy pocos minutos es sustancialmente distinto de este documento, que además servía como base para establecer—digamos también en un día de 1985, que no se sabe—el que "no podrá someterse al Arbitrio insular sobre el Lujo ningún producto que no esté sujeto al Impuesto estatal sobre el Valor Añadido", entre otros puntos, y venía detrás toda la propuesta de borrador del anteproyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento del Arbitrio insular sobre el Lujo.

Quiere decirse que había un planteamiento sustancialmente distinto en la consejería respecto a lo que ha dicho de lo que escribe ese documento, y es muy reciente.

Pero además es evidente que se modifica el Régimen Económico y Fiscal en cuestiones tan importantes como las siguientes:

Se dice que no desaparece formalmente el artículo 16 de la Ley 30/72, pero al no consignarse y al eliminarse desaparece en la práctica. Como también es entendible que desaparece en la práctica o, por lo menos, puede crearse un vacío jurídico importante en la práctica el hecho de que no aparezca ninguna mención explícita a la continuidad de la propia Ley 30/72, de 22 de julio.

Se afecta al artículo 15, en cuanto que se amplía el ámbito de no sujeción del hecho imponible. Y se elimina el apartado b) referente a los transportes interinsulares y de Canarias con el resto del territorio estatal.

Dice más. El artículo 2 del proyecto establece que "permanece vigente en Canarias el texto refundido del Impuesto sobre el Lujo". Eso es una auténtica barbaridad. Lo dice textualmente el texto.

Más aún. El artículo 3 del proyecto, referente a los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas, se contradice con la Ley de Impuestos Especiales y discrimina claramente a Canarias.

Más aún. El artículo 4 del proyecto también cae en esta misma circunstancia. Y además podríamos entrar en otra serie de aspectos que no quisiera, digamos, ampliar, porque el tiempo en este momento ya no me lo permite.

A la vista de las circunstancias de que sólo me queda el derecho *sotto voce* de poder pedir una reconsideración después de que se plantee la votación en este Pleno, procedimiento, en mi opinión, con todos los respetos, atípico porque implica la imposibilidad de readaptación de la postura de los grupos parlamentarios a las nuevas circunstancias; a la vista de que, efectivamente, el tema tal cual está planteado impide el que se pueda proponer un informe ajustado a las nuevas circunstancias, anuncio desde este momento la retirada de nuestra propuesta de informe, porque, efectivamente, es inviable ante las nuevas circunstancias, y se ha creado un vacío de tipo jurídico muy grave y no tiene ningún sentido el someter al pronunciamiento de esta Cámara un informe sobre un proyecto de real decreto-ley que ya no existe, que ya ha desaparecido al convertirse por el BOE en un real decreto-ley publicado y ya entrado en vigencia, pendiente de la convalidación.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Oswaldo Brito.

(*El señor Consejero de Hacienda, Bergasa Perdomo, indica su deseo de intervenir.*)

Sí, señor Bergasa (*Pausa.*).

(*El señor Consejero de Hacienda, Bergasa Perdomo, se acerca a la Mesa, ocupando posteriormente su escaño.*)

Para la presentación y defensa de su propuesta-informe tiene la palabra el Grupo CDS-Centro Democrático.

El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente. Señorías.

Explíqueme usted, señor Presidente, porque yo todavía no me he enterado, y no sé si será por los efluvios propios de las fiestas, en que uno suele estar más *cerrado* que en otras ocasiones, que, por ejemplo, en el mes de febrero o marzo, cómo vamos nosotros aquí a defender el planteamiento sobre un informe a un proyecto que ya no se ha convertido en proyecto. Es como si nos invitan al bautizo al que asistió el otro día como padrino don Jerónimo Saavedra y resulta que al llegar a la iglesia nos encontramos con que el neófito, pues, contrae matrimonio civil con una tercera (*Risas en la sala.*). Pues aquí pasa algo por el estilo. Yo en este momento no sé qué voy a informar sobre algo, sobre algo que ya ha pasado. Porque resulta que el señor cura —ya que estamos también en las fiestas y estamos con ejemplos como éstos— llegó a dar la absolución y se encontró con que ajusticiaron al reo; luego, lo único que puede celebrar es el funeral, que es lo que tendremos que celebrar nosotros aquí.

Porque, evidentemente, Señorías, creo que, aunque nos sonríamos, no es para estar precisamente satisfechos de que se abofetee de esa manera el prestigio institucional de la Comunidad Autónoma Canaria, que un buen día se consagró en la Constitución en cuanto al informe que se debía emitir, que posteriormente se reprodujo en el Estatuto de Autonomía, y que, sin embargo, el Gobierno de la nación le ha dado una pasada incommensurable. Porque todavía está en mi reciente recuerdo la asistencia a una sesión de la Junta de Portavoces en que precisamente el señor Presidente de esta Cámara, y yo quiero creer que ignoraba que se había dictado —y lo creo, y tampoco es muy bueno para el señor Presidente eso—, que se había dictado el real decreto-ley, cuando nos decía que, entre otras cosas, la razón de la urgencia estriba en que el próximo viernes, el viernes 27, el Consejo de Ministros se va a reunir para aprobar el proyecto ley correspondiente sobre el cual hay que emitir el informe oportuno, cuando se hablaba sobre si se trataba de una afectación o de una modificación. Y da la casualidad de que el mismo día en que estábamos celebrando aquí sesión plenaria para emitir nuestro parecer a propósito del Proyecto de Ley de Impuestos Especiales, el Consejo de Ministros estaba celebrando sesión y aprobando el mismo día 18 lo que debía haber aprobado mañana después de escuchársenos, aunque luego se nos diese una *patada en el trasero* y, como siempre, no se nos tomase en consideración.

Y ahora, sin embargo, después de este trámite de urgencia, nos encontramos hoy, desde luego, en una escena absolutamente ridícula, y que si no fuera por la seriedad que aquí dentro tenemos que imprimir a nuestros actos... no nos queda otro remedio que seguir avanzando en el debate.

Es evidente que el Gobierno de Canarias, desde el primer momento, ha compaginado en este tema el ocultismo en unas ocasiones, la falta de rumbo en otras, las discrepancias, que en alguna ocasión han llegado a que el señor Presidente del Gobierno hubiese desmentido o desautorizado, pues, manifestaciones formuladas por algún miembro del Gobierno, que no ha expresado quién, en una nota de prensa que se emitió en los medios de comunicación a propósito de todo este problema, y que, evidentemente, el Gobierno canario desde el primer momento se inclina por la modificación. Se inclina por la modificación, porque en su escrito remitido del 11 de diciembre solicita el trámite de urgencia para dar la tramitación correspondiente al apartado tercero del artículo 45 del Estatuto de Autonomía, que es el que habla de la modificación y no de la afectación.

Y nosotros lamentamos que después de la última decisión que se tomó en este Pleno, luego de la reclamación oportuna, todavía hoy en los medios de comunicación el señor Presidente de la Cámara haya ya hecho unas declaraciones en las que insiste —en el *Diario de Las Palmas* de hoy— en que lo que se resolvió el otro día democráticamente y por mayoría, a propósito de que se trataba de una afectación y no de una modificación, se trata realmente de una afectación. Y yo, por esto, señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, yo...

El señor OLARTE CULLEN: ...*(Ininteligible.)*

El señor PRESIDENTE: Señor Olarte.

El señor OLARTE CULLEN: ...*(Ininteligible.)* y en uso de las libertades que tengo, expreso mi protesta.

El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, su Señoría se ha confundido totalmente.

El Presidente de la Cámara no ha hecho esas manifestaciones o su Señoría las ha leído mal. De modo que yo le ruego a su Señoría que vuelva a leer el diario correspondiente y lea usted bien.

El señor OLARTE CULLEN: Muy bien, señor Presidente, lo volveré a leer y solicito que su Señoría haga lo mismo y, en su caso, rectifique, si es que su Señoría tiene que rectificar. Si yo tengo que rectificar, no tengo inconveniente ninguno.

Lo que es evidente, Señorías, es que aquí además se produce otra cosa, y que yo creo, señor Presidente,

que para el futuro es preciso que tengamos muy presente: ¿Quién es el que se encuentra legitimado activamente para solicitar de la Cámara que emita el dictamen preceptivo según la Constitución y según el Estatuto de Autonomía? ¿El Gobierno canario? De ninguna manera. A mí me parece que en este procedimiento se adolece también de un vicio flagrante de legitimación activa, que no ocurrió en la pasada sesión, cuando se trataba de un proyecto de ley que había entrado en el Congreso de los Diputados con un evidente retraso, evidentemente, pero, al menos, fue el Congreso de los Diputados quien se dirigió a esta Cámara, y a nosotros nos parece que no se le deben caer los anillos al Gobierno de la nación si se dirige al Parlamento de Canarias para que sea el Parlamento de Canarias quien emita su parecer a propósito de un proyecto de real decreto-ley que va a dictar, no el Gobierno de Canarias, sino el Gobierno de la nación. A mí me parece que esto es una cuestión muy clara, y sobre ella creo que merece la pena una somera reflexión.

Nosotros hemos formulado nuestra discrepancia, que ha sido presentada en el día de hoy, con motivo de una serie de cuestiones. Y de una manera absolutamente congruente con nuestro planteamiento de hoy, vamos a avanzar en este debate hablando de si realmente se requiere la emisión del informe previo por parte de este Parlamento, como así sostenemos y seguimos sosteniendo, o, por el contrario, basta con que el informe previo se produzca en el interregno entre la fecha en que se dicta el real decreto-ley y la fecha en que es convalidado en el Congreso de los Diputados.

Y nosotros creemos que el real decreto-ley, ese real decreto-ley de fecha 18 de los corrientes, adolece del vicio de inconstitucionalidad, que ese real decreto padece una nulidad absoluta *in radice*, y que no es subsanable por una convalidación, y que el informe debe emitirse con carácter previo a la formación de la voluntad del Consejo de Ministros en virtud de la cual se alumbra el real decreto que estamos ahora analizando, porque realmente lo que es evidente es que no analizamos un proyecto.

Yo creo que la falta de respeto impresionante de que se ha hecho objeto al pueblo canario, a través de su fundamental institución, no recabando el informe previo que, constitucional y estatutariamente, está establecido, no tiene parangón, y a buenas horas, Señorías, se iba a producir un desprecio de esta índole con la Comunidad Autónoma de Cataluña o con la vasca, pongamos por ejemplo. A buena hora el señor Pujol iba a reír —como ríe ahora el señor Presidente del Gobierno— o el señor Ardanza. Y mientras aquí estas risas en hechos como éstos no las sustituyamos con la gravedad de una preocupación y de una reflexión de cara al futuro y de no seguir tolerando lo que viene produciéndose, Señorías, me parece que la dignidad nuestra, la dignidad de Canarias como una comunidad autónoma, rueda por los suelos. Y por lo menos el Centro Democrático y

Social no está dispuesto a silenciar esto, aunque después nos vengan a decir que precisamente por no silenciarlo estamos alimentando el desarrollo de otras opciones que preocupan, al parecer, excesivamente.

Porque aquí ha ocurrido un hecho con una premeditación evidente, y esto es lo grave, porque el Gobierno de la nación, pese a que por sus declaraciones y las declaraciones de sus miembros en ocasiones parezca que no, están sometidos como todos los mortales a la falibilidad humana. Y yo comprendo que en diversas ocasiones pueda omitirse un trámite preceptivo, porque de humanos es el error. Y no necesariamente quiero hacer una presunción de mala fe permanente, porque no debe ser así. Pero es que en este caso no estamos ante la presunción de mala fe del Gobierno de la nación, estamos ante la evidencia de la mala fe; porque si no díganme sus Señorías por qué en el proyecto se dice lo siguiente en la exposición de motivos —lo cual, naturalmente, se borra luego en el texto que ha aparecido publicado en el *Boletín Oficial* del 23 de diciembre y corregido, por otras razones porque ahí se hablaba sólo de real decreto y luego se habla de real decreto-ley, en el *Boletín* —que todavía no ha llegado a Canarias, de anteaer, del día 24—. En el último párrafo de la exposición de motivos se dice: "En su virtud, emitido el dictamen preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, previa deliberación del Consejo de Ministros"; pues resulta que no es así, resulta que lo previo no ha sido el informe, sino que lo previo ha sido la deliberación del Consejo de Ministros.

Y cuando esto se resta y esto se sustrae, como se ve claramente, y no se pensaba hacer así inicialmente, ¿qué es lo que ocurre? Que les tenemos sin cuidado. Y lo malo no es que nosotros les tengamos sin cuidado, lo malo es que la disposición adicional tercera de la Constitución, lo malo es que el Estatuto de Autonomía en sus apartados tercero o cuarto —en este caso me tiene sin cuidado— del artículo 45 tiene sin cuidado también al Gobierno de la nación. Y ésta es una dejación, desde luego, que tan solo debe tener como respuesta la que en su día —y desde luego nosotros hemos formulado la iniciativa correspondiente a través de la proposición no de ley, como antes anunciamos—, en su día se acuerde formular o interponer el recurso de inconstitucionalidad correspondiente.

¿Pero qué ocurre? Aquí resulta que hoy hablaba la prensa de que el señor Presidente del Gobierno de Canarias es muy proclive a dar en una serie de fechas señaladas la bendición *urbi et orbi*; bueno, dará no una bendición, dará la maldición *urbi et orbi* (*Risas en la sala.*), porque en fechas muy señaladas resulta que una cantidad de personas, por el simple lujo de disentir, que al parecer es un lujo, debemos ser condenados al ostracismo o al infierno.

Aquí, por eso, yo no comprendo cómo puede decir el señor Presidente del Gobierno que el Parlamento autónomo verá afectada negativamente su credibilidad institucional si el próximo día 26 informa desfavora-

blemente el real decreto que regula el período transitorio del REF. Porque aquí, señor Presidente, lo que es evidente es que si ustedes tuviesen la mayoría absoluta a lo mejor nos tenían marcando el paso. Pero la discrepancia cómo va a constituir un demérito en el prestigio institucional de una Cámara que, entre otras cosas, ha nacido en el seno de una democracia para que pueda ser el receptáculo y la expresión permanente y libre de todas las discrepancias.

Hemos formulado reparos, reparos de forma y reparos de fondo. Reparos de forma, porque desde el primer momento hemos planteado que a nuestro juicio un real decreto-ley es inadecuado a los fines que se persiguen con el presente, porque lo proscriben los artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución.

Y algunos intervinientes, y desde luego el Gobierno y el representante del Grupo Socialista, nos mencionaban que no es así, y que se puede seguir el real decreto-ley, y que se puede seguir el real decreto-ley apoyándose, como parecía que se apoyaba, en una resolución del Tribunal Constitucional.

En materia fiscal el Tribunal Constitucional... —y las cosas hay que leerlas en su integridad, no a medias, porque si no se falta a la verdad jurisprudencial al menos— que el artículo 133.1 dice que "La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley". Este precepto define una competencia exclusiva del Estado. Y habla posteriormente de "que debe entenderse referida a la potestad originaria, al establecimiento de los tributos, pero no en cambio a cualquier tipo de regulación de la materia tributaria". Y que hay una legalidad estricta que comprende el establecimiento de los beneficios fiscales, en los que se encuentran las exenciones, pero no cualquier regulación. Y que en nuestra Constitución se ha producido una materia estudiada de una manera flexible, y que la reserva de ley hay que entenderla no en los supuestos de la creación *ex novo* de un tributo. Conforme.

¿Pero es que me van a decir ustedes que, por ejemplo, cuando estaba exceptuado el transporte entre las Islas Canarias o entre Canarias y la Península, según el artículo 15 de la ley del régimen fiscal, y, sin embargo, actualmente tan solo en ese apartado b), que era el que motivaba precisamente la exención de la aplicación del Impuesto de Tráfico de Empresas, queda eliminado? ¿Qué ocurre al eliminarlo? Pues al señor Bergasa le podrá dar mucha tranquilidad, pero a mí lo que piense el señor Bergasa, puesto que lo que va al *Boletín Oficial del Estado* en forma de norma legislativa es lo que piensan, no desde aquí, sino lo que piensan los compañeros del señor Borrell, que tan bien, al parecer, se ha entendido con el señor Bergasa, es lo que me preocupa profundamente.

Y cuando se eliminan algunos apartados del número primero, que a partir de ahora, por lo tanto, serán objeto de aplicación del Impuesto de Tráfico de Empresas, qué duda cabe de que, al margen de

que nosotros creamos que deben ser objeto de tal aplicación, lo que resulta evidente es que constituye la creación *ex novo* de un impuesto, porque la creación *ex novo* del impuesto no es crear el Impuesto de Tráfico de Empresas. La creación *ex novo* de un impuesto es crear precisamente los supuestos que son susceptibles de tal aplicación.

Y, finalmente, que no se diga que la urgente y extraordinaria necesidad justifica a ello, porque, aparte de que la necesidad para que se pueda dictar el real decreto-ley tiene que ser extraordinaria y urgente, lo que no podemos aquí es hacer una traslación de lo que los penalistas hablan del *versari in rei licita* aquí a esta Cámara, porque aquella persona que se embriaga para disfrutar posteriormente de un atenuante no puede disfrutar de él, y aquella persona que provoca el estado de necesidad y luego, cuando realiza el delito, dice: "es que yo lo he realizado porque me encuentro en estado de necesidad", tampoco. Aquí se trata de una necesidad que ni fue en el momento en que se creó extraordinaria ni fue urgente. Era una necesidad a la cual se pudo dar resolución a partir del mes de julio, que es cuando se produce, precisamente, la decisión a propósito de la entrada de España en el Mercado Común. Y a partir de entonces ha transcurrido medio año y, sin embargo, esa necesidad parece que ha surgido antes de ayer y que Santa Claus nos ha traído como regalo navideño el ingreso de España en el Mercado Común, y por ello, rápidamente, antes del 1 de enero tenemos todos que dar trámite de urgencia y tenemos todos que actuar consecuentemente con tal urgencia. Quien provoca la urgencia, Señorías, no puede beneficiarse de ella.

Nos encontramos, además, aparte de ello, pues, con una serie de razones de fondo (*Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores*). La luz roja se ha encendido ya. Por lo tanto, me limito a reproducir lo que ya por escrito y con todo detalle hemos expresado. Me limito a referir que el propio Partido Socialista, en su formulación, y por lo que se refiere a la parte segunda de su formulación, pone de manifiesto ya unos reparos, que aunque alivia en cuanto a la gravedad y a la entidad de los mismos, no cabe duda de que ahí están, como concretamente por lo que se refiere a todo el apartado segundo de la propuesta de informe que hace, lo cual hace abundar en la tesis que veníamos manteniendo desde el otro lado de esta Cámara y que, por supuesto, nosotros, lamentablemente, tenemos que retirar también nuestra propuesta. Tenemos que retirar nuestra propuesta, porque a última hora sería una especie de inocentada. Sería anticipar la fecha de pasado mañana a la fecha de hoy y decir: "vamos a emitir nuestro informe desfavorable al proyecto que ya se convirtió en real decreto-ley". Y para estos juegos, por lo menos, con el CDS no se puede contar.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte. (*El señor Consejero de Hacienda, Bergasa Perdomo, indica su deseo de intervenir.*)

Señor Bergasa: ¿a usted no le importa esperar a la intervención del Grupo Popular para hacer la contestación? (*Asentimiento.*) Yo se lo agradezco. Gracias.

Tiene la palabra para la presentación y defensa de su propuesta el Grupo Popular.

Don Francisco Marcos.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ: Señor Presidente. Señorías.

Nos encontramos ante un Pleno extraño, Señorías, un Pleno muy extraño. Muy extraño, porque hemos sido convocados en la tarde de hoy para debatir un tema, y por una táctica preconcebida, premeditada, por parte del grupo en el poder, se ha intentado arropar al Presidente de la comunidad autónoma en razón precisamente de las imputaciones que se han hecho desde esta propia tribuna en cuanto a la propia intervención del señor Presidente en los documentos que manda a la Cámara y luego sus manifestaciones fuera de la misma.

A mí me hubiera gustado muchísimo que, en vez de las intervenciones del señor Consejero de Hacienda, hubiese sido el Presidente de la comunidad autónoma el que nos hubiese explicado en la tarde de hoy sus esfuerzos, sus grandes esfuerzos de todo tipo, en defensa, precisamente, de las peculiaridades de nuestro sistema económico y fiscal y, fundamentalmente, de las peculiaridades de nuestra región y de la defensa que se está haciendo, por parte del Gobierno socialista, de ella.

Yo tengo que manifestar, en un primer momento, que aquí se han dicho cosas muy interesantes, aunque tengamos que desviarnos por breves instantes del contenido de la intervención fundamental, que sería la defensa de una propuesta que hemos formulado. En primer lugar, yo tengo que decir que, en el supuesto de que el Parlamento nacional convalide el proyecto de real decreto-ley sobre la imposición indirecta en Canarias, nuestro grupo presentará también, o se solidarizará —porque a fin de cuentas viene a ser lo mismo— con las iniciativas que en esta Cámara se inicien precisamente para promover un recurso de inconstitucionalidad. Y lo hacemos al amparo, precisamente, del artículo 162 de la Constitución en relación con la disposición adicional tercera de la misma. Eso creo que queda perfectamente claro, y lo queremos manifestar como principio de nuestra intervención.

También se ha hablado aquí, en reiteradas oportunidades, para intentar confundirnos en un tema que está perfectamente claro. Cuando esta Cámara ha tramitado en la tarde de hoy todo el procedimiento del estudio, o del dictamen, o del informe a emitir del real decreto, estaban superadas las etapas anteriores que se han vuelto a confundir en algunas intervenciones. Se ha vuelto a plantear el tema del artículo 54.4, cuando es la realidad que ya eso fue debatido en la Junta de

Portavoces en reunión con la Mesa, y el propio Presidente, que tendría que manifestarnos el porqué ha dicho eso, cuando remitió precisamente el proyecto, venía a pedimos a la Cámara que lo tramitásemos por el artículo 54.3. ¡Qué cosa tan absurda! El Presidente se ha callado, y sin embargo ante la opinión pública, porque utiliza los medios, precisamente los medios que no tienen réplica inmediata, utiliza los medios, precisamente, los medios con los que cuenta en esas reuniones de prensa para hacer y aclarar conceptos que luego aquí son completamente diferentes. Hubiésemos preferido que el señor Presidente se hubiese guardado esas interpretaciones que ha hecho en cuanto al comportamiento de una Cámara para esta tarde y no haberlo hecho precisamente con anterioridad, como un anuncio previo, de coacción, para que hoy, pensando que efectivamente íbamos a poner en entredicho las instituciones democráticas, cuando lo que estamos haciendo es defendiéndolas, ante el temor de poner en peligro las instituciones democráticas en la tarde de hoy, le diéramos el sí —*El sí de las Niñas*— a una propuesta que en modo alguno puede ...(*Ininteligible.*), en lo que respecta a mi grupo político, un sí que en modo alguno se merece el Gobierno, ni tan siquiera el comportamiento del Gobierno, que, en todo caso, en este procedimiento ha sido a mi juicio, a juicio de nuestro grupo, verdaderamente..., no quiero emplear palabras que puedan en cierta manera interpretarse como de forma negativa en cuanto a las personas, pero sí en cuanto al comportamiento colectivo, en razón de que en el mundo del foro empleamos a veces la palabra torticera para cuando se nos quieren plantear procedimientos, en cierta forma, para que caigamos en trampas de tipo jurídico y que demos nuestra aceptación o no aceptación a conceptos que con claridad hubiésemos manifestado algo totalmente en contra.

Cuando se habla del artículo 86, Señorías, yo no tengo aquí más que reiterarme en todo lo que se ha venido diciendo. El artículo 86 de la Constitución es claro, rotundo y terminante: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad". Eso para nuestro grupo no tiene ningún tipo de duda. Pero, evidentemente, la extraordinaria y urgente necesidad tiene que manifestarse. Y es absurdo que por parte de representantes del Partido Socialista se haya venido a decir aquí que ya desde hace tiempo, que ya desde hace tiempo, se están estudiando y se están estableciendo las posibilidades normativas adecuadas a las dificultades en que encontraríamos el régimen fiscal de Canarias una vez que entrásemos en la Comunidad Económica Europea y se aplicase el IVA. Si desde hace tiempo se están estudiando estas cuestiones, ¿en dónde está la urgencia y en dónde está la extraordinaria necesidad, tres días antes de fin de año, de venir a esta Cámara a traernos un proyecto que, sorpresivamente, se ha convertido en proyecto?, y que, desde luego, evidentemente, estamos aquí prácticamente pasando el tiempo, entreteniéndolo, en decir cosas que con unas simples palabras de acla-

ración del propio Presidente de la Cámara, que en cierta manera está llevando el debate político en cuanto a las intervenciones de los portavoces de los grupos, y cuando debía de ser el Presidente del Gobierno el que llevase el debate político, interviniendo y contestando y aclarando los conceptos equívocos que aquí se podían manifestar, e incluso diciéndonos por qué se guardó en el bolsillo precisamente lo publicado en el *Boletín Oficial del Estado*, y no forzando al Presidente de la Cámara a que nos manifestase si el momento oportuno para ponerlo sobre la mesa era una reunión de Junta de Portavoces previa, anterior, o era en la propia Cámara. Yo considero que los grupos políticos están legitimados para utilizar la documentación en los momentos procesales oportunos o de procedimiento, que es lo mismo, a los efectos de los intereses del mismo.

Canarias ha tenido siempre, Señorías, y quiero remarcarlo, independientemente de su factor geográfico, marcas definitorias de sus peculiaridades históricas que configuran, señor Presidente, la razón de ser de su comunidad como ente regional diferenciador de otras comunidades nacionales, y fundamentalmente las marcas definitorias están localizadas en los cabildos insulares y están localizadas en nuestro régimen especial fiscal y económico. Eso es evidente.

Cuando Canarias nace dentro del contexto de la España de las comunidades, evidentemente no teníamos otro bagaje histórico que aportar sino el hecho diferenciador geográfico de los canarios en medio del Atlántico, donde habíamos perdido la apoyatura logística de un Sahara que se nos volvió hostil y donde habíamos perdido incluso las posibilidades de sentirnos geográficamente cercanos a países de nuestra propia comunidad, cuando logramos colocarnos en el Atlántico como un portaviones en donde en algunos aspectos necesitamos más que ninguna otra región española el contacto directo y personal de nuestra comunidad con los órganos definitorios de la política nacional a nivel de Madrid, nos encontramos con que cada día estamos jugando más a la frivolidad de los comportamientos, a la ingenuidad de las posiciones de un Gobierno que no está haciendo una defensa rigurosa de esas peculiaridades en razón de la identidad de una región que aún carece de esa propia identidad.

El señor Presidente de la "Cámara" nos tiene acostumbrados, parcamente, pero sí, a hacer afirmaciones que luego desmiente o que luego realmente no cumple.

El señor PRESIDENTE: Señor Marcos Hernández, es absolutamente insólito en una asamblea legislativa que se hagan referencias a las actuaciones del Presidente de la Cámara, ¡absolutamente insólito! Yo le ruego se abstenga de hacer manifestaciones a los miembros de la Mesa, porque están absolutamente prohibidas por el Reglamento. Se lo ruego, por favor, para evitar acontecimientos como los que surgieron en el Pleno anterior. Se lo digo con serenidad, con toda serenidad.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ: ...(*Ininteligible.*) se dirige a este diputado, yo tengo que decirle qué pregunta concreta o qué afirmación concreta considera el señor Presidente que afecta o atenta a sus Señorías, en cuanto a la Mesa, y a los representantes del Gobierno en cuanto a los mismos.

El señor PRESIDENTE: No tengo que contestar absolutamente nada. Su Señoría sabe muy bien a qué me refiero y, por consiguiente, yo le ruego que continúe con su exposición.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ: ...(*Ininteligible.*) señores diputados, no por esperada, quería decir, sorpresiva, porque la ...(*Ininteligible.*) y la sorpresa a fin de cuentas no parece que se conjuguen, pero sorpresiva en este momento, porque yo tenía argumentos muchísimo más duros que tal vez, evidentemente, voy a tener que cuidar muy mucho en el contexto en que los voy a verter.

Decía en el discurso de investidura del señor Presidente, y estaba refiriéndome a ese hecho, y si se ha modificado o no se ha modificado el concepto del discurso de investidura o si se ha cumplido o no ha cumplido las promesas del discurso de investidura; estoy refiriéndome a un hecho concreto que dimana de la voluntad del Presidente del Gobierno, de su actuación y que, evidentemente, yo como diputado analizo sus expresiones y analizo también sus...

El señor PRESIDENTE: Señor Marcos Hernández, lamento de momento decirle que su Señoría hizo referencia, no al Presidente del Gobierno sino al Presidente de la Cámara, y por eso es por lo que le hice la observación correspondiente.

Puede continuar.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ: Señor Presidente, entonces rectifico el contenido en cuanto al Presidente de la Cámara, y en una segunda intervención, que ya habíamos pasado el tema anterior, en cuanto a que en cierta forma y manera yo me refería a que los miembros del Gobierno y el portavoz del Partido Socialista estaban llevando el debate camuflando las actuaciones del Presidente del Ejecutivo y vertiendo en cierta manera una cierta tensión entre los miembros o los portavoces de los grupos al Presidente de la Cámara, cosa que no era correcta. Estaba haciendo una defensa del señor Presidente de la Cámara más que un ataque. Lamento que se haya interpretado de forma negativa. No obstante, creo que vale por sí solo lo manifestado ahora para aclarar que yo decía que en el debate de hoy ha intervenido más el Presidente de la Cámara en función de los comportamientos de los grupos que el propio Presidente del Gobierno. Simplemente ésa era mi intención.

No obstante, vuelvo a coger el hilo, a reconducirlo, porque, claro, cada vez que se le llama a uno

la atención, evidentemente, sus Señorías piensan que el discurso decae, porque va uno perdiendo fuerzas en el *in crescendo* que uno siempre desea en sus intervenciones en la Cámara.

El discurso de investidura de su Señoría, del señor Presidente: "cuando llegue el caso" —decía el señor Presidente del Gobierno refiriéndose al tema de hacienda— "cuando llegado el caso"—nos lo estaba anunciando el señor Presidente, en aquel momento era clarividente, era un hombre que en cierta forma y manera tenía un discurso pensado en el futuro y pensado en una legislatura, y a eso, en cierta forma, hay que decirle que no tengo ninguna crítica que hacer, es lógico que quien asume esa responsabilidad tenga prevista una serie de circunstancias, como las tenía previstas el señor Presidente—, "cuando llegado el caso se presente algún proyecto relacionado con los temas tributarios"—el señor Presidente debe de recordar lo que leo, porque son sus propias palabras—"los planteamientos y argumentos técnicos y políticos tendrán un peso específico de alta consideración".

Señorías, quiero detenerme en un hecho: el propio Presidente le está dando alta consideración a los planteamientos relacionados con los argumentos referidos a los temas tributarios. Y el señor Presidente en la tarde de hoy esa alta consideración no la ha demostrado; más bien, esa alta consideración estaba en relación con los medios de comunicación que con esta Cámara. "El Partido Socialista no tendrá reparos —decía el señor Presidente— en hacer uso de las facultades que el Estatuto le señala". Estaba hablándonos del Estatuto, conocía el Estatuto, defendía el Estatuto, cosa que el señor Presidente en la tarde de hoy difícilmente nos está dando pruebas de esa defensa del Estatuto.

Y decía también: "pero lo hará de forma seria y responsable, consciente de la importancia de los instrumentos fiscales, conjugando siempre factores tales como la equidad, solidaridad y eficacia".

Señor Presidente, en ese mismo discurso, muy pocos renglones posteriormente, hablaba su Señoría de que "en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido nos manifestamos defensores de las fuentes de financiación autónomas que nos proporciona el REF, por lo cual propondremos un IVA diferencial, cuyo rendimiento sea equivalente a los arbitrios insulares y se destine en la financiación de las corporaciones canarias".

Señorías, si la urgencia del real decreto o del proyecto del real decreto, está en razón de que desde el discurso de investidura su Señoría no ha tenido todavía tiempo de tener una idea clara respecto a cómo han de quedar precisamente los impuestos en Canarias, primeramente nuestro Régimen Económico y Fiscal, evidentemente la urgencia para mí, evidentemente, está justificada.

Si una legislatura no es suficiente para que su Señoría venga aquí para decirnos que, evidentemente, el tema del IVA le ha cogido de sorpresa, yo

tengo que decir que lo comprendo, lo lamento, pero tengo que apoyar a su Señoría en cuanto a que la urgencia se produce como consecuencia de que su Señoría no ha tenido tiempo y, evidentemente, por el comportamiento del Gobierno autónomo, posiblemente no ha tenido tiempo de entrar en estos temas.

Al señor Bergasa solamente voy a hacerle dos manifestaciones, porque, en cierta forma y manera, su esfuerzo por desvirtuar el contenido de este debate, en lo que respecta a este portavoz, no ha tenido ningún eco. No voy a contestarle ni a entrar en discusión con usted respecto a la cantidad de cosas que aquí se han vertido en relación con algo que no era propio del orden del día; ha intentado usted convertir el debate de la tarde de hoy en una defensa de su Presidente. Le honra esa situación, pero no hemos caído en la trampa.

Usted hablaba de *pólvora en salvas*, señor Bergasa, al principio de su intervención, y a veces las salvas advierten de los acontecimientos. Precisamente gracias a las salvas de los señores diputados, se puede desvelar el oscurantismo que ustedes propugnan. Ha de tener, y tiene esta Cámara y debe de tenerla siempre, una crítica rigurosa que les obligue a ustedes a dar claras explicaciones, que en la mayoría de los casos no convencer ni a los señores diputados, que *gastan* su *pólvora en salvas*, ni a nuestros conciudadanos, que sin gastar *pólvora*, porque no tienen ni dinero para comprarla, ni *salvas*, sí, evidentemente, escuchan sus protestas, que casi valen tanto como las salvas que su Señoría intentó aquí poner de manifiesto.

No se trata de decir aquí que la presión fiscal, señor Bergasa, estará en Canarias o será igual en Canarias a la existente. Eso es una falacia, porque, evidentemente, pudiera resultar que eso fuese cierto. Aquí de lo que se trata es de que el señor Bergasa nos demuestre —y el problema está en demostrarlo— si en la Península estará más baja la presión fiscal, si tendrá mayores ventajas la presión fiscal en la Península que las que... (*Ininteligible*.) agravio comparativo con el archipiélago canario. Y eso es lo que el señor Bergasa ha ocultado, porque no va a ser así, porque nosotros en nuestro escrito, en nuestra propuesta, evidentemente queda suficientemente claro que no va a resultar que la presión canaria vaya a resultar ni siquiera igual, va a ser muy superior a la presión fiscal en la Península. Y eso es un hecho y una realidad que está ahí y que el señor Bergasa no ha dicho nada para contradecirlo.

Podríamos hablar de muchas cosas para justificarlo y dejarlo claro. Es muy largo todo lo que tendríamos que decir en la tarde de hoy. Por ejemplo, concretamente, yo podría decir que, en cuanto a una conculcación de la legislación vigente, o su Señoría no se ha leído la Ley General Tributaria, en donde en su artículo 2 se establece claramente que no se podrán imponer impuestos sino mediante ley, evidentemente que está en relación con la propia Constitución española, aquí ocurre que se están modificando y se están imponiendo cuestiones nuevas.

Cuando se aplica el número dos de la disposición final de la Ley 30/85, del IVA, ahí exactamente, Señorías, fíjense ustedes que aparecen derogadas una serie de disposiciones fiscales que amplían el abecedario, empiezan en la a), la b), la c), la d), la f), y llegan precisamente a agotarlo, porque se quedan, en todas las disposiciones que se derogan, en la y), le faltó la z), que posiblemente era para cerrar la larga lista de disposiciones. Y entre ellas está el Decreto 3.314/66, donde se aprueba el texto refundido del Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas; está el texto refundido sobre el Impuesto de Lujo y sus disposiciones complementarias; está el Decreto 255/70, de 16 de abril, por el que se regula la desgravación fiscal a la exportación y disposiciones complementarias; están las normas reguladoras de la percepción de la Seguridad Social Agraria, recogidas en el Decreto 2.123/71. Señorías, son muchas las disposiciones que por ley se han derogado, son muchas las disposiciones que por ley se han derogado, y no cabe decir que quedaron vigentes, porque también pudo haber dicho la Ley del IVA: "y en cuanto a Canarias quedarán subsistentes la aplicación de tales y tales y tales disposiciones, que se reglamentarán de acuerdo con el real decreto o el decreto correspondiente que las ponga en funcionamiento". Porque sí hay una excepción, ¡cuidado!: "No obstante la fecha de publicación de la presente ley en el *Boletín Oficial del Estado*, el Gobierno podrá exigir a las empresas o profesionales el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 112 de la Ley General Tributaria. El día 1 de enero quedarán derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio" —¡sin perjuicio!, señores, no teman, no va a decir "sin perjuicio de Canarias", no lo va a decir, podía haberlo dicho pero no lo ha dicho—, "sin perjuicio del derecho de la hacienda pública a exigir las deudas tributarias devengadas con anterioridad a aquella fecha". Es decir, que la única excepción que se establece en una ley del Estado aprobada con todos los requisitos que tal ley exige, son, precisamente, que quedarán pendientes de liquidar aquellos impuestos devengados durante el período en que anteriormente estaba en vigor y que aún no han sido liquidados. No deja la puerta abierta para nada para el tema que en la tarde de hoy nos ocupa (*Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores*).

Yo tal vez, y posiblemente —tengo la luz roja encendida—, podría señalarles los temas importantes, como es que nos diga, por ejemplo, el señor Bergasa, ya que evidentemente es un tema que a la opinión pública le interesaría conocer, si los 6.000 millones de pesetas que se van a recaudar por el IVA van a quedar aquí. En cierta forma y manera podríamos decir, "bueno, pues, en cierta forma y manera estamos pagando los canarios algo distinto, pero estamos mejorando o beneficiando a nuestro pueblo, o si ese importe va a significar..." Porque sería mucho mejor que hubiesen dicho que esos 6.000 millones se iban a deducir como consecuencia de la bajada del Impuesto sobre el Lujo.

No, señor Bergasa, no nos ha convencido. Pero lo que no nos ha convencido, fundamentalmente, es la actitud del señor Presidente. Un Presidente que se oculta bajo el ala de la protección de sus consejeros o bajo la protección de su grupo parlamentario, en cierta manera pone en duda la credibilidad que ante el pueblo ha de tener. Yo no me atrevería aquí a manifestar de una manera tremendista que pedimos la dimisión del señor Presidente, eso está en su propia conciencia. El señor Presidente sabrá, en cierta forma y manera, cómo está llevando esta comunidad y a los grados de deterioro a que está llevando a nuestra comunidad, no solamente en Canarias, sino en la credibilidad que la misma tiene en el ámbito nacional. Lo que se está intentando hacer con nuestro pueblo canario no es sino consecuencia precisamente de que saben perfectamente desde Madrid que existe una gran debilidad en los comportamientos de rigor de un Gobierno que no exige la defensa de aquellas peculiaridades que tienen los canarios, y que aquí si el señor Presidente subiera y se hubiese manifestado en esa línea, hubiese tenido el aplauso y el voto del Grupo Popular. Se lo garantizo, señor Presidente, y no se sonría usted. No se sonría usted, porque, a veces, esa sonrisa meliflua con la que usted se manifiesta ante la Cámara no está sino ocultando su propia sinrazón y su propio comportamiento.

Yo lo que quiero decir es que nuestro grupo se ve en la tarde de hoy abocado, como consecuencia de los acontecimientos que aquí se han pronunciado, abocado a sugerirle, señor Presidente, que reconsidere su posición en la Comunidad Autónoma de Canarias y su posición en relación con el Gobierno de la nación. Y decir que nuestro grupo no tiene más remedio, para no dar con una actuación —continuando con la votación de nuestra propuesta—, dar la imagen equívoca de que nos desmarcamos del comportamiento del resto de la Cámara que ha tenido en la tarde de hoy una rigurosa intervención, no solamente doctrinal —ya que tan favorable a la expresión doctrinal viene siendo el diputado y portavoz socialista—, no solamente doctrinal sino legal, incluso jurisprudencial, no podemos participar en este enjuague y retiramos también nuestra proposición en razón de los argumentos aquí vertidos.

Muchísimas gracias, Señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marcos Hernández.

(El señor Presidente del Gobierno, Saavedra Acevedo, solicita hacer uso de la palabra.)

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO (Saavedra Acevedo): Señor Presidente. Señorías.

Yo comprendo que el señor Marcos tenga una obsesión por que yo suba a la tribuna. No era mi plan esta vez subir, pero sí voy a aprovecharlo para dirigirme a los ciudadanos a través de ustedes, representantes de los ciudadanos de Canarias.

Y yo quiero decirles que, después de unas tres horas de debate, realmente lo que estamos debatiendo aquí es un decreto-ley que se reduce a las siguientes consecuencias para el ciudadano canario:

Primero. Respecto al Impuesto sobre alcoholes. Un impuesto que se está pagando hoy, que se va a seguir pagando a partir del 1 de enero con esa presión fiscal gracias a este decreto-ley. Decreto-ley que ha incorporado este tema gracias a la negociación emprendida por el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Hacienda de la Administración central, porque en el debate de esa Ley de Impuestos Especiales no conozco y no sé el empeño que pusieron sus Señorías, que tienen colegas en representación del pueblo canario en las Cortes, sea en el Congreso de los Diputados o sea en el Senado, que hayan formulado alguna enmienda en relación con la aplicación de esa Ley de Impuestos Especiales. Y por eso la semana pasada, en el último Pleno, votamos todos unánimemente en contra de la aplicación de esa ley que, gracias a este decreto-ley, deja de tener los efectos perjudiciales que contenía la misma.

Segundo. Si no es por este decreto-ley, el Arbitrio de Lujo del que se nutren los cabildos y los ayuntamientos de Canarias, quedaría en el aire sin una base ni apoyatura legal. Por consiguiente, son los cabildos y los municipios de los que depende mantener esas recaudaciones, sin ninguna duda de legalidad, gracias a este decreto-ley.

Tercero. El Impuesto de Tráfico de Empresas que hoy se está pagando en Canarias, a partir del 1 de enero, gracias a este decreto-ley, se va a dejar de pagar en varios sectores importantes para la actividad económica de las islas. Por consiguiente, da la sensación, después de oír a sus Señorías, representantes de la derecha y algunos adheridos, que aquí estamos ante un decreto-ley catastrófico que va a inundar de problemas, que el Gobierno canario está desinteresado con la defensa de los intereses de Canarias y que gracias a la actuación del Gobierno de Canarias los distintos borradores que se han ido elaborando a lo largo del mes de octubre y noviembre, en conversación y en el seno del consejo asesor, donde están presentes las representaciones de las organizaciones empresariales más representativas de Canarias, junto con los sindicatos, igualmente, más representativos de Canarias, ahí se han visto todos esos borradores, no ha habido ningún ocultismo y, precisamente, porque ha habido que estar forzando hasta el final la modificación de esos borradores, nos encontramos hoy con algunos problemas de fondo, de forma que ustedes tratan de engrandecer y plantear permanentemente un debate jurídico-constitucional, que supongo, como otros que anteriormente se han producido en esta Cámara, terminarán probablemente en el rechazo absoluto por parte del Tribunal Constitucional, teniendo el precedente de una sentencia clarísima y referida precisamente a este deber de información del Parlamento de Canarias con anterioridad a la convalidación de un decreto-ley, y sus Seño-

rías saben perfectamente que la convalidación requiere la publicación previa, y así lo ha dicho el Congreso de los Diputados. Y hasta el jueves pasado, cuando recibimos la comunicación del Gobierno de la nación, teníamos ese texto que se remitió a esta Cámara, precisamente porque era el deseo del Gobierno de la nación negociar con Canarias y que informara ese proyecto de decreto-ley. Pero han sido exigencias del Reglamento y de la propia Constitución que un decreto-ley no se puede convalidar si no está publicado previamente en el *Boletín Oficial del Estado*. Y estamos en la fecha en que estamos, y ese decreto-ley tiene que empezar a producir sus efectos el día 1 de enero próximo.

Ésta es la realidad de este debate. Todo lo demás han sido *salvas de pólvora*, como se ha señalado ya con anterioridad, y se trata de ocultar esta realidad. Que el pueblo canario, a través de los empresarios —porque dudo que vayan a beneficiarse luego los ciudadanos consumidores—, va a tener una ventaja gracias a la aplicación de este decreto-ley a partir del próximo 1 de enero. Y hay cifras que se pueden cuantificar, y miles de millones que sacaremos en la prensa, dado que no hay manera de que ustedes se enteren y que hagan los cálculos correspondientes, y que serán los gobiernos civiles —porque es competencia exclusiva del Estado— los que deben también informar a los ciudadanos respecto a los ahorros en presión indirecta que se van a producir en Canarias a partir del 1 de enero gracias a este decreto-ley.

Y le recuerdo a su Señoría, señor Marcos, que es un hecho que parece que es pacífico, y si no llegamos a aceptar estos hechos que son indudables hoy en Canarias, no podemos seguir dialogando ni podemos seguir discutiendo: que la presión indirecta en Canarias es la mitad que en el resto de la nación. ¡Entérese, si no se ha enterado todavía, están los números ahí! La presión indirecta en Canarias es la mitad que la que pagan el resto de los españoles. Y a partir del 1 de enero, con la aplicación del IVA, será mucho mayor esa diferencia entre Canarias y la Península en presión indirecta. Y estamos comprometidos, naturalmente, a una rápida modificación del REF para que este decreto-ley sea sólo transitorio, una norma transitoria, que supone un alivio en la presión fiscal —no se olvida—, supone un alivio en la presión fiscal, y los organismos representantes de los intereses empresariales están de acuerdo con nosotros. Tendrán matices diferenciales sobre si el ITE se ha olvidado de suprimirse para unas determinadas actividades, pero ahí están las actas del Consejo Asesor Económico y Social de Canarias, donde pueden comprobar la posición de los representantes de las organizaciones empresariales.

Si ustedes, en algún caso, han logrado ya perder los puentes y las conexiones con algunas de esas confederaciones empresariales, es un tema político de ustedes, pero no es un tema del Gobierno, ni hay ocultismo, y se han puesto todos los datos sobre la mesa; se han hecho múltiples borradores y hemos estado trabajando

en ese consejo asesor y en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda permanentemente, y hemos obtenido este resultado, que, repito, es un beneficio para el pueblo canario. Y por encima de cualquier debate, de cualquier batalla, de cualquier *cortina de humo*, ésa es la realidad a partir del 1 de enero: menor presión fiscal indirecta en Canarias.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Marcos, para rectificar o para replicar, tiene tres minutos.

El señor MARCOS HERNÁNDEZ: Señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, resulta extraña, grata, muy grata, pero extraña, la intervención de su Señoría en la tarde de hoy. Le agradezco profundamente el hecho y lo interpreto como una deferencia del señor Presidente al subir a esta tribuna para contestar a algunas cosas que yo pensé que, efectivamente, se iban a contestar, y no a hacer otras afirmaciones que no venían al hilo de las que yo había manifestado.

Pasado este capítulo de gracias, que por el tiempo en que vivimos, evidentemente, los corazones están abiertos al perdón y a los agradecimientos y a las felicitaciones, he de decir que, bueno, que me sorprende muchísimo que el Presidente nos hable de la derecha y de sus adheridos. Evidentemente, yo podría haber hablado aquí de la izquierda y de sus adheridos, o podría haber hablado del Partido Socialista y sus pactantes, y ni siquiera he tenido la *indelicadeza* de llegar a esos extremos, porque mi intervención era pura y exclusivamente en defensa de una posición de un grupo político que hacía una crítica de otro grupo político, y creo que en cierta forma y manera todas esas tendencias que hacen cada vez que los miembros del Partido Socialista suben a esta tribuna de querer hacer connotaciones o más a la derecha o menos a la derecha, o más al centro o menos al centro, evidentemente, cuando no, en cierta forma y manera, son de mal gusto, porque a nosotros no nos afecta, porque nuestra posición política sigue siendo la misma que ha sido siempre en esta Cámara y la seguimos manteniendo. Estamos al lado de quienes defienden a Canarias, vengan de donde vengan sus comportamientos, y estamos en contra de quienes deterioran a nuestra comunidad, sean quienes sean, sea la izquierda radical, sea la izquierda comunista, sea la izquierda moderada, sea la izquierda de donde venga, con los adláteres o adheridos, que en cierto momento pudiera tener en defensa de sus intereses.

La prensa dice el señor Presidente que la utiliza porque intentan enseñarnos a través de la prensa: raro procedimiento de un profesor. Se dirige a la prensa porque los parlamentarios no nos enteramos, tenemos que enterarnos de lo que dice el señor Presidente a través de la prensa. Manifestación absurda, aunque yo no dejo de reconocer la parte educativa que tienen los

medios de comunicación para llevarnos a todos los aquí presentes, incluso al propio Presidente; creo que, evidentemente, en más de una oportunidad ha tenido que aprender cosas en la prensa, porque si no fuese así, evidentemente mal le irían las cosas.

¿Actas de los empresarios? ¿Reuniones con un consejo asesor? Qué duda cabe, señor Presidente, que usted lo tiene, usted lo ha nombrado y le dirán lo que usted quiera o le dirán lo que en cierta manera usted quiera esperar de ellos (*Risas en la sala.*). Pero, evidentemente, nosotros también tenemos nuestros consejos asesores y nos dicen lo contrario, señor Presidente, con la misma sonrisa que usted está manifestando, con la misma profundidad y con el mismo chiste que ustedes desean. Si usted me dice a mí que los empresarios de Tenerife están contentos con que se mantenga el ITE; si usted me dice a mí, señor Presidente, que los empresarios de Canarias están muy satisfechos con que el Impuesto sobre el Lujo, que había sido derogado, se prorrogue —bueno, en cierta manera estamos ante una contradicción—; si usted me dice a mí, señor Presidente, que lo de los impuestos sobre la cerveza, que termina su IVA en la Península y tiene una desgravación a la importación, que luego, cuando se beben en Canarias, van a venir muchísimo más mejoradas que las nuestras con relación a la imposición sobre las cervezas y los alcoholes, pues, señor Presidente, sus asesores realmente le están dando a usted una imagen de la realidad un poco bucólica.

Si eso fuese así, a mí me gustaría asistir a esas reuniones del consejo asesor del señor Presidente con la finalidad de extraer de ellas todo el conocimiento que no extraigo de las intervenciones del Presidente.

Muchas gracias, señor Presidente, por la amabilidad en la larga exposición, creo que me he pasado de los minutos que me tenían marcado. Pero quiero decirle que usted no me ha convencido, señor Presidente; que si usted se hubiese leído las motivaciones serias de nuestra motivación en el informe que hemos redactado, y que hemos lamentado posiblemente no haber tenido la oportunidad de ser votados en el día de hoy, comprenderá que ellas se basan en un examen riguroso de la situación de nuestra comunidad y de las conculcaciones que se han venido haciendo por ese proyecto de real decreto, que llaman proyecto, que ya es real decreto, de nuestro Estatuto de Autonomía y de las disposiciones fiscales que usted es el primero que debe defender.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marcos.
(*El señor Olarte Cullen solicita intervenir.*)
Señor Olarte, sí.

El señor OLARTE CULLEN (*Desde su escaño*): He sido contradicho por el señor Presidente del Gobierno, porque la contradicción no se produce por la mención nominativa de aquella persona a quien se contradice. Yo he basado, entre otros pilares de mi intervención, la mis-

ma en el ocultismo que he alegado ha existido en todo este proceso y, además, una parte muy importante de ella, en la imposibilidad de que se pueda producir el trámite de audiencia después de consumado el proyecto de ley, y, por lo tanto, eso ha sido negado por el señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pero, señor Olarte, vamos a ver, su Señoría ha retirado su enmienda; ha habido una intervención del Presidente del Gobierno, que no había intervenido en este turno. Entonces, el debate ha terminado.

La alusión a don Francisco Marcos fue lo que motivó el que yo le permitiera a don Francisco Marcos que interviniera, pero no se ha aludido directamente al señor Olarte, en absoluto.

El señor OLARTE CULLEN (*Desde su escaño*): Si el señor Presidente pretende que yo no rebata al señor Presidente del Gobierno, pues muy bien, pues...

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente lo que pretende es que se cumpla el Reglamento, señor Olarte, y su Señoría lo ha votado; o sea, si su Señoría tiene problemas con el Reglamento, presente su Señoría una solicitud de reforma del Reglamento.

El señor OLARTE CULLEN (*Desde su escaño*): No, tal como lo aplica su Señoría no hace falta, es perfectamente fácil de entender, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte, muchas gracias.

Pasamos a continuación ya a la votación de la única propuesta de informe mantenida hasta el momento, que es la propuesta de informe presentada por el Grupo Socialista (*Pausa.*).

Señorías, vamos a proceder a la votación (*Rumores en la sala.*). ¡Silencio, por favor!

¿Votos a favor de la propuesta de informe del Grupo Socialista? (*Pausa.*) ¿Votos en contra de la propuesta? (*Pausa.*) ¿Abstenciones? (*Pausa.*)

Vamos a repetir los votos en contra, porque hay una duda en la Mesa. ¿Votos en contra, por favor? Ruego que levanten la mano (*Pausa.*). Correcto.

Resultado de la votación: a favor de la propuesta 29 votos; en contra 27 y ninguna abstención.

La propuesta ha obtenido la mayoría simple y con este quórum de mayoría simple se remitirá al Gobierno central del Estado y al Presidente del Congreso, si bien hay que hacer constar que el parecer no tiene carácter favorable por no reunir la votación el quórum especial que establece el artículo 45.3 del Reglamento de la Cámara.

Se levanta la sesión.

(*Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos.*)
